

SEGUNDA PARTE

Protestas agrarias

María Clemencia Ramírez

LOS MOVIMIENTOS CÍVICOS COMO MOVIMIENTOS
SOCIALES EN EL PUTUMAYO: EL PODER VISIBLE DE LA
SOCIEDAD CIVIL Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA
CIUDADANÍA*

En esta ponencia me referiré a las marchas cocaleras que tuvieron lugar en los departamentos de Guaviare, Putumayo y Caquetá entre julio y septiembre de 1996, haciendo referencia en algunos apartes de la ponencia a la Amazonía occidental como tal y, en otros, al caso concreto del Putumayo.

Como presupuesto inicial, sostengo que las marchas cocaleras de 1996 no pueden entenderse desligadas de otros paros y movimientos cívicos anteriores a éstas, que desde una perspectiva de larga duración son manifestaciones coyunturales de movimientos sociales centrados alrededor de una demanda central: el reconocimiento por parte del Estado-nación colombiano tanto de su ciudadanía como de sus derechos adscritos como ciudadanos y como habitantes con larga permanencia –si no oriundos– en la región amazónica.

Con el ánimo de contribuir al debate sobre los nuevos movimientos sociales a partir de este caso, quiero dejar planteados tres puntos centrales para la discusión:

* Esta ponencia forma parte de la tesis de doctorado en curso para el departamento de Antropología Social de la Universidad de Harvard. El trabajo de campo lo realicé en el Putumayo y Baja Bota caucana, en el marco de un proyecto de investigación del Instituto Colombiano de Antropología financiado por Colciencias, bajo mi dirección, que se desarrolló también en los departamentos del Guaviare y Caquetá. Para mi trabajo de grado, he recibido la financiación de la Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research y del United States Institute of Peace.

En primer lugar, y como resultado del anterior presupuesto, se hace indispensable analizar detenidamente los procesos de exclusión y marginalización a los cuales se han visto expuestos los habitantes de la Amazonia occidental y, más específicamente, la población colona. Se puede afirmar que la construcción de la marginalidad de la región amazónica es definitivamente una estructura de larga duración que explica y legitima las políticas que se dictan desde el gobierno central para esta región. Esta relación que se establece entre el centro del país y esta región marginal es un eje de análisis desde la perspectiva de la representación que de una región se hace de la otra: la exclusión del otro (en este caso los habitantes de la región amazónica) y la percepción o asunción de esta exclusión por parte del mismo estaría reflejando una relación de espejo que no puede perderse de vista, y se torna recurrente en los discursos que se construyen por unos y otros sobre esta región, así como en el desarrollo del movimiento de los *cocaleros*.

En segundo lugar, y en respuesta a estos procesos de exclusión, en el Putumayo se observa como una constante a lo largo de las últimas décadas la tendencia de los movimientos sociales a convertirse en movimientos políticos autónomos de los partidos tradicionales. Su búsqueda por lograr una inclusión en el sistema político nacional, caracterizado por la exclusión sistemática de partidos políticos de oposición a los dos partidos tradicionales que detentan el poder, ha sido constante, y en este sentido podríamos hablar del ejercicio de una *política de la inclusión* “dirigida hacia las instituciones políticas buscando que nuevos actores políticos ganen reconocimiento por parte de los miembros de la sociedad política y así poder ganar beneficios para aquellos que ellos representan” (Cohen y Arato 1994: 526).

Sin embargo, se hace evidente que esta búsqueda de inclusión política ha sido impedida sistemáticamente por la violencia institucional y/o estatal que se ha instaurado en Colombia y

que se dirige contra cualquier partido político de oposición. Tal como lo han anotado Uprimny y Vargas (1989: 116), la guerra sucia “es un mecanismo de oposición a la política de paz, a la legalización de la actividad guerrillera y a la apertura de espacios políticos para nuevas fuerzas”¹. En este contexto, y considerando que es en la Amazonia occidental donde las FARC han establecido “otro gobierno dentro del gobierno”, según declaraciones de Manuel Marulanda Vélez (Entrevista en *Semana*, enero 18/99: 22), el logro de una representatividad política dentro del sistema político institucional se torna fundamental para estos movimientos sociales surgidos en el seno de una sociedad civil estigmatizada por la presencia guerrillera en la zona y que, por consiguiente, es permanentemente atacada, amenazada y deslegitimada.

En tercer lugar, y a partir de esta situación de conflicto que conlleva a la estigmatización y deslegitimación, la relación que se establece entre el Estado y la sociedad civil² debe ser discutida con detenimiento, centrándose en el análisis de cómo se ma-

¹ Para la década de los ochenta Uprimny y Vargas (1989: 118-119) señalan, respecto a los sectores victimizados por la guerra sucia: “desde el punto de vista de la extracción social, la guerra sucia ha tendido a golpear sobre todo al campesinado y en segundo término a la clase trabajadora urbana. Desde el punto de vista de la actividad pública se ha concentrado en los líderes populares, sindicalistas, activistas políticos y educadores, aun cuando también afecta a los sectores intelectuales y a los mismos funcionarios oficiales (... en la actualidad) la guerra sucia no sólo ha aumentado en intensidad sino que se ha urbanizado de forma creciente”.

² En cuanto a la definición del concepto *sociedad civil*, referido principalmente a la relación sociedad-Estado, para lo que atañe a la discusión que aquí se presenta, es fundamental tener en cuenta dos características que le han sido señaladas por diversos autores (Bejarano, 1992; Lechner, 1996; Bonamusa, 1997; Keane, 1998) que se han ocupado de reflexionar sobre ésta: en primer lugar, su independencia del Estado y su concreción en organizaciones diversas al margen del sistema de los partidos políticos, permitiendo establecer determinadas relaciones Estado-sociedad, según las organizaciones que se encuentren en la zona objeto de estudio y las formas en que actúa el Estado en la misma.

nifiesta la democratización de la vida cotidiana en dicho contexto y, más aún, cómo se percibe el ejercicio de la ciudadanía. A pesar de que es debido a la expansión de un cultivo ilícito y a la presencia de las FARC en la zona que los coccaleros han ganado la atención del Estado, la insistencia en dialogar con los representantes del gobierno central y, aún más, de hacer uso de las herramientas dadas por la Constitución de 1991 en el contexto de la democracia participativa, para hacerse oír por el Estado central, es sobresaliente durante y después de las marchas, hecho que debe resaltarse. Más aún, la sociedad civil en la región de la Amazonia occidental busca, a través de estas acciones de participación ciudadana, plantear su posición autónoma frente a los grupos armados en la zona (paramilitares, guerrilla y ejército), promotores de una guerra civil, guerra que se vuelve inminente con la posible aprobación del paquete de ayuda militar por parte de Estados Unidos.

Cohen y Arato (1994) han insistido en que la influencia de la sociedad civil sobre la sociedad política es una dimensión central de la democracia. Para estos autores, la sociedad civil se torna así no sólo en terreno para la acción colectiva contemporánea, sino en objetivo de los movimientos sociales, por cuanto se busca democratizar las relaciones sociales dentro de la sociedad civil. Los movimientos sociales juegan un papel fundamental en este sentido, por cuanto su éxito lo conciben como el logro de la democratización de valores, normas e instituciones enraizadas en una cultura política. Además de una *política de la inclusión*, Cohen y Arato (1994) consideran que los nuevos movimientos sociales buscan también influir sobre el discurso político hegemónico y, más aún, sobre las instituciones, e introducen *la política de la influencia* y *la política de la reforma* como otros aspectos fundamentales para tener en cuenta en el análisis de los objetivos y/o logros de los nuevos movimientos sociales:

Una *política de la influencia* que busca alterar el universo del discurso político para acomodar nuevas y necesitadas interpretaciones, nuevas identidades y nuevas normas, es también indispensable. Sólo con una combinación de esfuerzos puede ser restringida y controlada la colonización administrativa y económica de la sociedad civil que tiende a congelar las relaciones de dominación y crear nuevas dependencias. Finalmente, el avance en la democratización de las instituciones políticas y económicas (una *política de la reforma*) es también central para este proyecto. Sin este esfuerzo cualquier ganancia dentro de la sociedad civil sería tenue (Cohen y Arato, 1994: 526).

Si partimos de la imposibilidad de lograr una inclusión en el sistema político nacional —a pesar de haberlo logrado localmente algunos movimientos cívicos en momentos coyunturales—, la pregunta sobre la *política de la influencia* de estos movimientos sociales sobre el campo de lo político y, más aún, su incidencia en la reforma de las instituciones del Estado así como en sus políticas hacia la región, se convierte en eje del movimiento de los cocaleros de 1996, por cuanto nos introduce en el análisis de la relación que se establece en áreas de conflicto entre el Estado y la sociedad civil.

Este análisis cobra aún más importancia si tenemos en cuenta la crisis de hegemonía por la cual atraviesa desde la década de los ochenta el régimen político colombiano³, que durante el gobierno de Samper se hizo aún más evidente a partir de las acusaciones referentes a la financiación de su campaña con dineros

³ Para un análisis de la crisis de hegemonía del gobierno durante la década de los ochenta, véase Uprimny y Vargas (1989: 143), quienes establecen como hipótesis que “la guerra sucia es una de las expresiones de las dificultades del régimen político colombiano a inicios de los ochenta: éstas derivan de una doble crisis de hegemonía, en el sentido que Poulantzas da a estos términos: crisis de hegemonía del bloque tradicional en el poder con respecto a las clases subordinadas, por el agotamiento relativo de los mecanismos tradicionales de dominación; crisis de la hegemonía dentro del mismo bloque en el poder, por la presencia de los empresarios de la dro-

[REDACTED]

[REDACTED]

provenientes del narcotráfico. La intensificación de las fumigaciones y de la penalización de los cultivadores de coca se traduce en una forma de posicionarse frente a los Estados Unidos como persecutor del narcotráfico, pero al mismo tiempo se genera un gran movimiento social *cocalero* que devela en la práctica la falta de políticas estatales planificadas para complementar esta fumigación con planes alternativos de producción para los campesinos, lo cual deslegitima al Estado frente a los habitantes del Putumayo, haciendo que el movimiento gane más adeptos que cuestionan al Estado, sin embargo, al mismo tiempo, y ésta es la paradoja, al analizar el desarrollo del movimiento no se plantea una lucha frontal contra el Estado, sino que, por el contrario, se demanda la presencia efectiva del mismo en la zona, por cuanto es el apoyo del Estado el único camino que los representantes de la sociedad civil ven para lograr una alternativa democrática participativa frente a la guerra contra las drogas declarada por Estados Unidos y las fuerzas armadas. En palabras del general Bedoya, una vez se inician las marchas en el Guaviare: “Vamos a recuperar este territorio que está inundado de cultivos ilícitos. El gobierno y las fuerzas armadas van a combatir este flagelo. Ésta es una guerra que vamos a ganar, estamos empeñándola, nos vamos a demorar un rato, pero la vamos a ganar completamente” (declaraciones en el Noticiero AM-PM).

LOS MOVIMIENTOS CÍVICOS COMO MOVIMIENTOS SOCIALES Y/O POLÍTICOS: EL CASO DEL MOVIMIENTO CÍVICO DEL PUTUMAYO

La marcha cocalera de 1996 fue organizada por el Movimiento Cívico Regional del Putumayo, el cual se consolida como tal a fi-

ga, una poderosa nueva fracción dominante que no logra tener la expresión política y social que corresponde a su poder económico y militar”.

nales de 1994, en el marco de un paro cívico que tuvo lugar entre el 20 de diciembre de 1994 y el 11 de enero de 1995, en respuesta a la intensificación de la “guerra con glifosato” como política del gobierno para la erradicación de los cultivos ilícitos, pero sobre todo demandando la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo (PLANTE), retomando su planteamiento central de “complementar las campañas de erradicación forzosa, mediante inversiones de carácter social” (documento CONPES 2734, 1994). Además, se exigió la ejecución de obras de infraestructura, como la interconexión eléctrica, vías y programas en educación y salud, y destinación de las regalías del petróleo para programas de desarrollo comunitario, y se demandó la iniciación de las negociaciones con la guerrilla, insistiendo en que “la paz se debe lograr a través de cambios concretos en los aspectos sociales, políticos y con la participación de la sociedad civil”.

Al hacerle un seguimiento a este Movimiento Cívico Regional que durante las marchas se amplía y se consolida como Movimiento Cívico para el Desarrollo Integral del Putumayo, se hace evidente que se trata de un movimiento social que se había venido gestando como resultado de los diversos paros cívicos que habían tenido lugar en el Putumayo. Frente a prácticas políticas de los partidos tradicionales, como la exclusión de otros partidos, el clientelismo y la maquinaria política, los líderes locales contraponen una cultura política de resistencia que a la vez responde y es moldeada por estas prácticas dominantes, y se convierte en un discurso contrahegemónico que, como tal, es perseguido y censurado por las élites⁴. En palabras de un fun-

⁴ Williams Roseberry (1994: 360) retoma el concepto de hegemonía de Gramsci para entender la lucha entre grupos dominadores y subalternos y señala: “Las formas en que las palabras, imágenes, símbolos, formas, organizaciones, instituciones y movimientos son utilizados por poblaciones subordinadas para hablar de enten-

cionario de la región al referirse a los paros cívicos que han tenido lugar en el Putumayo desde la década de los setenta:

Estos fenómenos de tipo social se deben y se gestan fundamentalmente ante el vacío de la dirigencia política tradicional que, la verdad sea dicha, apunta muy al beneficio individual, al beneficio grupista o partidista, pero, con contadas excepciones, no ha habido una representación a nivel del Congreso o de la misma gobernación y de las mismas alcaldías, líderes que hagan esta función, que sean unos verdaderos gestores del desarrollo del departamento. En consecuencia, ante ese vacío y los innumerables problemas, la gente se va apersonando, se va organizando en movimientos sociales, movimientos cívicos que han terminado en paros muy largos, de pronto costosos para la región en términos de debilitar la frágil economía, más que todo comercial, de los distintos municipios del departamento, y también costosos en vidas y costoso en lo que entraña generar ambientes de conflicto, profundizar unos conflictos que de base acá se han asentado (entrevista a líder político local en Mocoa, 1999).

Otro líder político local aclara que a lo largo del tiempo han surgido diferentes movimientos políticos, según zonas específicas del Putumayo (por ejemplo en Puerto Guzmán, Puerto Leguizamó, Orito, Mocoa), pero insiste en que aunque el nombre cambia, las ideas son las mismas, situación que para los políticos tradicionales no es ajena, y agrega:

Creo que el Putumayo tiene una dinámica nueva, el hecho de que los movimientos cívicos, movimiento Unidad Campesina

der, confrontar, acomodarse a, o resistir su dominación están moldeadas por los mismos procesos de dominación”.

[movimiento político], movimientos nuevos que han surgido, si no han podido continuar hacia el futuro, se han tenido que mudar, pero siguen, continúan y eso es esperanzador (entrevista a ex alcalde de Puerto Leguizamo, 1999).

Es en esta medida que se puede hablar de la emergencia de nuevos movimientos sociales en la región de la Amazonia occidental, movimientos que abren diversos espacios políticos, generan pluralidad de demandas y cuestionan los partidos políticos tradicionales, buscando, sin embargo, ser reconocidos y poder articularse, a través de la consolidación de movimientos políticos, al discurso hegemónico del Estado central. Tanto Santana (1992) como Archila (1995) han señalado la tendencia de los movimientos cívicos hacia su conversión en movimientos políticos, pero ambos concluyen que no logran consolidarse como tales, lo cual se cumple para el caso de la Amazonia occidental. Archila (1995: 276-277) señala además como algo “paradigmático” que los movimientos cívicos son “la expresión más dinámica de la acción colectiva en el país, tanto, que atraen e incorporan a otros movimientos, incluidos los típicos de clase, recomponiendo identidades”. ¿Cómo se recomponen esas identidades en el caso del Putumayo y del movimiento social de los *cocaleros*?

LA EMERGENCIA DE IDENTIDADES COLECTIVAS POLITIZADAS COMO RESPUESTA A LA EXCLUSIÓN Y LA MARGINALIZACIÓN

En el movimiento social de los *cocaleros* se pone en evidencia la *política del reconocimiento*, la cual se define en relación con la construcción de identidades, de acuerdo como la entiende Taylor (1995: 249):

Nuestra identidad está parcialmente moldeada por el reconocimiento o la ausencia de éste, muchas veces por el desconoci-

miento o reconocimiento distorsionado (*misrecognition*) de los otros, de manera que una persona o grupo de personas pueden sufrir daño y deformación si las personas o la sociedad a su alrededor les reflejan a manera de espejo una imagen de ellos mismos degradante, reducida o despreciativa. El desconocimiento o el reconocimiento distorsionado puede producir daño, puede convertirse en una forma de opresión, al confinar a alguien dentro de una forma de ser falsa, deformada y reducida.

Taylor está enfatizando no sólo que la identidad de un grupo se define en relación con o en contra de los significativos otros (en el caso de los habitantes de la Amazonia, sus significativos otros son los representantes del Estado central), sino también que el reconocimiento, así como el desconocimiento y el reconocimiento distorsionado, forja identidades. Al respecto, Young (1990: 44) enfatiza que los grupos son expresión de relaciones sociales y, por consiguiente, un grupo social existe sólo en relación con otro grupo. La identificación de un grupo social emerge en su interacción con otros, al experimentar diferencias como grupo a su interior, en sus formas de vida, de asociación, aun cuando se reconozcan como pertenecientes a la misma sociedad. Los significados que los definen como grupo son reconocidos como propios, ya sea porque éstos hayan sido impuestos sobre ellos, forjados por ellos, o ambos.

La idea que Young introduce sobre la imposición de significados como grupo por parte de otro grupo es fundamental en el análisis de las identidades colectivas que emergen en el movimiento social de los cocaleros, como se verá a continuación. Young lleva su análisis sobre el concepto de grupo social al punto de insistir en que

[...] algunas veces un grupo emerge como tal porque otro grupo lo excluye y le pone una etiqueta, un nombre a una categoría

de personas, y aquellos rotulados se identifican como miembros de este grupo poco a poco, sobre la base de su opresión compartida (Young, 1990: 46).

Wendy Brown (1995) lleva esta reflexión más lejos e insiste en que, cuando se protesta contra la marginalización o la subordinación, las identidades políticas se ven adscritas a su propia exclusión, porque es a partir de esta exclusión que existen como identidad. Más aún, analiza que al tratarse de identidades estructuradas por el resentimiento –y aun cuando con las protestas se busca liberarse del sufrimiento al que se han visto expuestos aquellos grupos marginados–, este resentimiento alimenta la sujeción, hasta el punto de que una identidad politizada que se presenta como una autoafirmación puede predicar y requerir el rechazo sostenido por parte del otro para existir como tal.

Estas reflexiones son centrales para entender que las identidades colectivas en la Amazonia occidental están siendo moldeadas por los sentimientos de exclusión y abandono por parte del Estado central y la clase política hegemónica, y como resultado, las identidades políticas que emergen lo hacen respondiendo a este Estado central ausente, que cuando se hace presente durante los paros cívicos es represivo, y reitera la condición de marginalidad de sus habitantes, tal como se hace evidente durante las marchas cocaleras y los movimientos cívicos que las preceden.

A los cocaleros se les ha impuesto una identidad como grupo social, en el sentido que ha descrito Young: los campesinos cocaleros son representados por las fuerzas armadas como “masas mafiosas patrocinadas por el cartel de las FARC” (declaraciones del general Bedoya, en Padilla, *Cambio 16*, N^o 164, agosto 5/96: 18), de manera que el evento, de ser un movimiento campesino, cambia su configuración al ser los campesinos cocaleros tildados de delincuentes, dedicados a actividades ilícitas y, por lo tanto, marginales económica, política y socialmente respecto

a la región central del país. Aún más, el general Bedoya enfatiza que los cultivadores de coca son inmigrantes venidos de todas partes del país, a quienes los mafiosos les prestan plata para sembrar, recoger y procesar la coca, y una vez les empiezan a cobrar “esta gente llegada de todas partes del país no tiene cómo responder y queda atrapada, secuestrada por las FARC, que la obliga a promover paros como los que estamos viendo”, y sostiene que hay que mantener las medidas represivas y las zonas de orden público, “para proteger a la gente que es prisionera de la mafia. Son esclavos movidos como recuas por los terroristas de las FARC” (declaraciones del general Bedoya, en Padilla, *Cambio 16*, N^o 164, agosto 5/96: 18-20). De esta manera, se impide a los campesinos cualquier iniciativa y, aún más, se les compara con animales.

Sibley (1995: 27) ha señalado cómo deshumanizar a través de la adscripción de atributos animales a los otros es una manera de legitimar su explotación y exclusión de la sociedad civilizada. A partir de estos marcadores de identidad impuestos a los cocaleros como grupo social, se representan como dominados y aún más secuestrados por las FARC, por lo cual se afirma que los campesinos “aceptan huir del acoso de las FARC con la ayuda del ejército”, y así se empieza a forzar el desplazamiento de la gente del Guaviare hacia Villavicencio por parte de las fuerzas armadas. Este desplazamiento, sumado a la destrucción de cultivos y laboratorios, busca, según el general Bedoya, “dejar sin trabajo a cerca de 100.000 coqueros de Guaviare, Caquetá y Putumayo” y “cuando se les acabe el trabajo, tendrán que irse como llegaron porque, para citar el caso del Guaviare, ni el 2% de los habitantes nació allí. Nosotros estamos ayudando a trasladarlos” (declaraciones del general Bedoya, en Padilla, *Cambio 16*, N^o 164, agosto 5/96: 18-20). Es tal el desconocimiento y la invisibilidad de los antiguos pobladores de esta región, que el general Bedoya llega a afirmar que “hay sitios donde sembrar algo distinto a la

coca es imposible. Así ocurre en el sur del Guaviare. Allí lo que hay que hacer es tratar de salvar esa selva que la narcoguerrilla está acabando con los químicos de la coca” (declaraciones del general Bedoya, en Padilla, *Cambio 16*, N^o 164, agosto 5/96: 18-20). Se antepone así la recuperación de la selva amazónica, de acuerdo con el discurso hegemónico de preservación del medio ambiente, a la atención de los campesinos y recolectores de coca que insisten, con su movimiento, en develar un problema social regional, en contestación al problema judicial de ilegalidad que domina el discurso del Estado central, y exigen que se les escuche y se les reconozca como pobladores de la región, antes de ser tildados como narcotraficantes y subversivos.

En este contexto de desconocimiento o reconocimiento distorsionado por parte del Estado central de los habitantes del Putumayo, Caquetá y Guaviare, la demanda central de los cocalleros es la de ser reconocidos como habitantes de la región interesados en su desarrollo y, por lo tanto, ser oídos y tenidos en cuenta cuando se traten problemas referentes a su región, como la erradicación de la coca. En palabras de los campesinos de la vereda Villanueva en la jurisdicción de Mayoyoque (Putumayo):

Señores de Corpoamazonia, defensoria del pueblo, agricultura, cómo vamos a sobrevivir los campesinos si el gobierno todo nos fumiga; con los cultivos ilícitos, también nos fumiga los lícitos. Practicamente nos encontramos padeciendo de hambre. Nuestros pastos han sido fumigados junto con el platano, la yuca, el maiz, el arroz. *Nosotros los campesinos lo que queremos es aserle entender al gobierno que como ustedes tambien somos humanos que tambien somos colombianos que como ustedes tambien tenemos hijos.* La pequeña diferencia que ay entre sus hijos y los nuestros es que de sus hijos nunca escucharán decir tengo hambre como nosotros escuchamos a menudo de los nuestros despues de la fumigación y lo único que podemos responder la cruda verdad que el Gobierno con todo

acabó (Carta dirigida a la Defensoría del Pueblo, Julio 26 1998.
Transcripción ortográfica original e itálicas mías).

Se hace evidente la asunción por parte de los habitantes de la Amazonia occidental de su condición marginal y es así como demandan al gobierno, en primera instancia, ser considerados como seres humanos y, después, como ciudadanos colombianos. Esta percepción de denigración, negación e invisibilidad va a atravesar el discurso cultural y político que se maneja en la región. Ser señalado como *colono cocalero* se convierte así en una categoría excluyente que genera resentimiento, por cuanto se les adscribe una identidad negativa como gente al margen de la ley, y como tal no se les adscribe un lugar dentro de la sociedad legal y, peor aún, cuando se les reconoce un lugar, se les rotula o categoriza como “auxiliares de la guerrilla” y, como tales, son objeto de violencia sistemática.

Podemos afirmar entonces que la violencia del Estado, aunada a las crecientes exclusión, estigmatización y marginalización a las que han estado sometidos los habitantes de la Amazonia occidental por décadas, y a la importancia global que ha adquirido el cultivo de la coca en el marco de la guerra contra las drogas, crearon un movimiento social que demanda la presencia del Estado civil y alternativas económicas al cultivo de la coca concertadas con las comunidades.

Esta afirmación se hace evidente cuando un líder del Putumayo explica cómo surge la necesidad de movilizarse, y pone de manifiesto el desconocimiento del cual fueron objeto por parte del Estado central antes de las marchas:

[...] las comunidades se dirigieron por escrito, buscaron entrevista con el nivel central, pidiendo Presidencia, Red de Solidaridad, Ministerios del Interior, Agricultura, Medio Ambiente, etc., sin que hayan encontrado eco o respuesta positiva a estas inquie-

tudes, a estas manifestaciones de la comunidad y, en consecuencia, ante esta falta de diálogo, esta falta de entendimiento de recepción de la problemática por parte de la comunidad, ésta se vio prácticamente abocada a irse organizando en los distintos municipios para afrontar el problema desde otro punto de vista, y apuntaba fundamentalmente a movilizarse, a expresarse por distintos medios (entrevista a líder político en Mocoa, 1999).

Aun cuando el eje del movimiento cocalero de 1996 se centró en la búsqueda del reconocimiento por parte del Estado central del cultivo de coca como un problema social y económico, antes que ser tratado como un problema punitivo de carácter jurídico-legal como se venía haciendo, y así lograr un tratamiento no represivo del problema, los acuerdos que se firmaron se centraron alrededor de un listado de necesidades básicas en servicios de electrificación, infraestructura vial, salud, saneamiento básico y seguridad social, educación, vivienda, recreación deporte y cultura. Además se reiteraron los acuerdos suscritos en el paro cívico anterior.

Se ha establecido como lugar común que la lucha por servicios públicos e infraestructura no estructura un movimiento social, y se habla de “listas de mercado” que no llevan a ninguna solución concreta, que se quedan en el papel y que no se cumplen, que desmovilizan los movimientos cívicos y los llevan a su desaparición. Esta mirada de corto alcance no permite entender qué se busca, más allá del reconocimiento por parte del gobierno, de estas necesidades básicas insatisfechas. Tanto Álvarez como Dagnino enfatizan que detrás de las demandas por infraestructura y servicios públicos, por parte de sectores excluidos, como es el caso de los habitantes de la Amazonia occidental, existe la expresión de la demanda del derecho a ser ciudadano. En palabras de Álvarez (1997: 109):

[...] los movimientos sociales proveen a los excluidos política y socialmente con espacios públicos críticos y alternativos en los cuales ellos pueden re/construir identidades culturalmente estigmatizadas y aún más vilipendiadas y reclamar su “derecho a tener derechos” no sólo de servicios sociales, sino de dignidad humana, diferencia cultural y/o equidad social.

En el movimiento social de los *cocaleros*, los campesinos insistieron en demandar sus derechos o, incluso más, el derecho a tener derechos como ciudadanos colombianos “dignos”, cuestionando su señalamiento como personas al margen de la ley, violentas y marginales. Así, se lee en una pancarta en Puerto Asís: “Vereda Alto Piñuña Blanco se une con fuerza y dignidad para exigirle al gobierno que respete y reconozca los derechos de los campesinos”. Durante las marchas un campesino es entrevistado en el puente de entrada a Florencia (Caquetá) y aclara contundentemente;

Nosotros no venimos con propósitos de causar desórdenes. Nosotros nuestro propósito, o el propósito que le he oído decir a todos los marchantes, es: *venimos a reclamar nuestros derechos*, venimos a reclamar algo nuestro, nosotros no venimos a reclamar que no se haga la fumigación, si, de pronto esa es la interpretación que le han dado mucha gente, no. La mayoría, quizás todo el mundo está de acuerdo en que se acabe la coca, digámoslo. No es eso lo que estamos reclamando, que no se acabe la coca, sino que hayan garantías, que hayan formas de trabajar tanto en el campo *como personas que están trabajando en el pueblo, personas, todo el mundo necesitamos nuestros derechos, entonces estamos reclamando es nuestros derechos* (entrevista en el noticiero AM-PM. Itálicas mías).

En otra pancarta se expresa claramente: “Nosotros también somos colombianos. ¿Por qué tanto abandono? Necesitamos un

mejor futuro para nuestros hijos. Merecemos ser escuchados”. Un líder del movimiento, al referirse a la falta de inversión en el departamento, afirma: “¿O es que nosotros no tenemos cédula de ciudadanía así como la tienen ellos? La diferencia es que ellos [se refiere a la clase dirigente] son ladrones y nosotros somos humildes. Ésa es la gran diferencia, pero somos colombianos. Pero colombianos somos, y somos los que trabajamos” (discurso posterior a las marchas).

Pedro Santana (1993: 249), al evaluar el papel de la clase obrera en la construcción de una sociedad democrática, concluye que se hace necesario que los trabajadores y sus organizaciones entiendan la nueva dinámica de los movimientos sociales, para lo cual deben dejar de verse sólo como trabajadores y considerarse ciudadanos. Añade que este cambio implicaría una nueva forma de relacionarse con los demás sectores subordinados. Mientras pareciera por esta afirmación que el reivindicarse como ciudadanos no se hace evidente en los movimientos obreros, es el eje para grupos marginales como el de los cocaleros.

Aquí vale la pena anotar que para el caso concreto del Brasil, Dagnino (1998) busca entender cómo estos movimientos sociales han contribuido a resignificar las relaciones entre cultura y política en sus luchas democratizadoras, y arguye que la operacionalización de esta concepción alterna de democracia se lleva a cabo a través de la redefinición de la noción de ciudadanía y de su referente central, la noción de derechos ciudadanos. Lo que están demandando entonces estos nuevos movimientos sociales es la transformación radical de la institucionalidad política, es decir, la redefinición del significado y los límites de lo político. En síntesis, argumenta (1998: 50) que “la redefinición de la noción de ciudadanía, tal como es formulada por los movimientos sociales, expresa no sólo una estrategia política, sino una política de la cultura”.

EL ESTADO Y LA SOCIEDAD CIVIL: HACIA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y EL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA COMO ALTERNATIVA AL CONFLICTO

Se puede afirmar, entonces, que es a través de los movimientos cívicos que se hace visible la organización de la sociedad civil, y es a través de las mesas de negociación que se entablan entre los líderes del movimiento social y los representantes del Estado local o central, como el poder del movimiento es reconocido, y en nuestro caso, se reconoce a los cocaleros como habitantes –ya no migrantes– de esta región amazónica. En la negociación, este poder se confronta y se obliga al Estado a oírlos y tomar en cuenta las diferencias de perspectivas. En palabras de Mellucci (1993: 250), “la acción colectiva hace posible la negociación y el establecimiento de acuerdos, que, aunque transitorios, sirven como condición de una democracia política capaz de proteger a la comunidad contra el incremento de riesgos de un ejercicio del poder o de la violencia”. Exigir mesas de negociación y firma de acuerdos se ha convertido en el Putumayo en una forma de ejercer la demanda de derechos ciudadanos, reconocimiento como movimientos sociales, en última instancia, de demandar su inclusión dentro de una democracia participativa promovida por el Estado, pero a la cual no han podido acceder, o de plantear nuevas formas democráticas y de ejercicio de la ciudadanía. Estamos entonces ante el florecimiento de una sociedad civil que se opone a las políticas del Estado, pero que a la vez demanda su participación en la planeación de las mismas, presiona y genera movimientos sociales, condición *sine qua non* de la democratización de la vida cotidiana. Entonces, podemos concluir señalando, como lo hacen Cohen y Arato (1994: 562), que

[...] el éxito de los movimientos sociales a nivel de la sociedad civil no debe medirse en términos del logro de ciertos objeti-

vos [en nuestro caso, los acuerdos firmados] o de la perpetuación del movimiento [en nuestro caso, el movimiento de los cocaleros], sino en términos de la democratización de valores, normas e instituciones afianzadas, en últimas, en una cultura política. Tal desarrollo no puede volver permanente a una organización o movimiento dado, pero puede asegurar la modalidad de movimiento como un componente básico de sociedades civiles en procesos de autodemocratización.

Aunque se ha sostenido que una condición necesaria de la democracia son espacios públicos independientes de las instituciones del gobierno, del sistema de partidos y de las estructuras del Estado (Melucci, 1993: 258), para el caso de la Amazonia occidental, y específicamente para el Putumayo, es evidente que hacer uso de espacios de participación ciudadana abiertos por el Estado se ha vuelto central en la lucha por mantener una autonomía como movimientos sociales y/o políticos. Una continuidad entre el Estado y la sociedad civil, en la que se establezcan relaciones de cooperación, antes que una autonomía de la sociedad civil frente al Estado, es lo que se vislumbra como una alternativa para el fortalecimiento de la sociedad civil en zonas de conflicto⁵. En palabras de los campesinos de la vereda Villanueva, jurisdicción de Mayoyoque (Putumayo):

⁵ Ana María Bejarano (1995), en su artículo "Para repensar las relaciones Estado, sociedad civil y régimen político, una nueva mirada conceptual", sostiene que para consolidar un régimen democrático se hace necesaria "la existencia simultánea de una sociedad fuerte y un Estado fuerte, enfrentados el uno al otro, en una relación caracterizada por la tensión permanente, pero también por el mutuo control, la negociación y el acomodamiento". Aun cuando la negociación y el consenso son enfatizados como forma de relación, es condición la fortaleza de los dos al enfrentarse, lo cual no se cumple para el caso de la sociedad civil de la Amazonia occidental, cuyo fortalecimiento depende del apoyo del Estado.

Los campesinos no pedimos que no fumiguen, lo que nosotros queremos es que el gobierno entienda nuestras necesidades, que por favor, antes de combatir o en otras palabras erradicar cultivos ilícitos nos den primero alternativas de trabajo a nuestra comunidad. Se pregunta en que quiere convertir el gobierno nuestro país con la fumigación. Lo único que el Gobierno está consiguiendo es que aumente el hambre y la violencia porque todos podemos entender que si hay hambre hay desesperación y un país desesperado por el hambre desde luego que traerá violencia (carta dirigida a la Defensoría del Pueblo, julio 26, 1998. Transcripción ortográfica original y subrayado mío).

Los cocaleros demandan la presencia del gobierno en la región, mostrando su deseo de ejercer la democracia participativa antes que tomar las armas. Es así como el respeto a los derechos humanos y al derecho a la vida son también temas centrales de los movimientos cívicos que se gestan durante la presente década. En otra pancarta del movimiento de los cocaleros, se lee:

Exigimos solución a los problemas de los campesinos del Putumayo. Queremos la paz. No a la incrementación de la violencia, no a la violación de los derechos de los colombianos (Piñuña Negro). ¿Por qué matas la vida? Dios nos la dio. ¿Qué haces para respetarla? Déjanos vivir⁶.

“Llamar al Estado al rescate de la sociedad civil” (Walzer, 1991:125) se convierte así en una demanda central en el con-

⁶ En 1990 se establece, por medio de la Ley 03 de 1990 y por Acuerdo dictado por el Concejo Municipal, el primer Comité de Derechos Humanos en Puerto Asís, conformado por 17 instituciones, del cual fue coordinador uno de los líderes del Movimiento Cívico.

texto del conflicto armado entre guerrilla, paramilitares y ejército en la Amazonia occidental y específicamente en el Putumayo.

Bibliografía

Álvarez, Sonia. "Reweaving the Fabric of Collective Action", in Richard G. Fox and Orin Starn (eds.), *Between Resistance and Revolution. Cultural Politics and Social Protest*. New Jersey: Rutgers University Press, 1997, pp. 83-117.

Álvarez, Sonia, Arturo Escobar y Evelina Dagnino (eds.). *Cultures of Politics and Politics of Cultures. Revisioning Latin American Social Movements*. Boulder (Colorado): Westview Press, 1998.

Archila, Mauricio. "Tendencias recientes de los movimientos sociales", en Francisco Leal Buitrago (compilador), *En busca de la estabilidad perdida, actores políticos y sociales en los años noventa*. Bogotá: Tercer Mundo Editores-Iepri, 1995, pp. 251-301.

Bejarano, Ana María. "Para repensar las relaciones Estado, sociedad civil y régimen político. Una nueva mirada conceptual", *Controversia*, N° 167, octubre-noviembre de 1995, pp. 9-32.

———. "Democracia y sociedad civil: una introducción teórica", *Análisis Político*, N° 15, enero-abril de 1992, pp. 68-85.

Bonamusa, Margarita. "¿Qué es la sociedad civil?: una mirada a Colombia", en *Sociedad civil, control social y democracia participativa*. Bogotá: Fescol, 1997, pp. 65-88.

Brown, Wendy. *States of Injury. Power and Freedom in Late Modernity*. Princeton: Princeton University Press, 1995.

Cohen, Jean and Andrew Arato. *Civil Society and Political Theory*. Cambridge: MIT Press, 1994.

———. "Social Movements, Civil Society and the Problem of Sovereignty", *Praxis International*, Vol. 4, N° 3, 1984, pp. 266-283.

- Dagnino, Evelina. "The Cultural Politics of Citizenship, Democracy and the State", in Sonia Álvarez, Arturo Escobar y Evelina Dagnino, (eds.), *Cultures of Politics and Politics of Cultures. Revisioning Latin American Social Movements*. Boulder (Colorado): Westview Press, 1998, pp. 33-63
- Documento Conpes 2734-DNP-UDA-UJS-*. Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Plan Nacional de Rehabilitación, Directorio Nacional de Estupefacientes, Consejería Presidencial para la Política Social. Octubre 12 de 1994, Bogotá.
- Dryzek, John S. "Political Inclusion and the Dynamics of Democratization", *American Political Science Review*, 90 (1), september 1996, pp. 475-487.
- Gupta Akhil and James Ferguson (eds.). *Culture, Power, Place. Explorations in Critical Anthropology*. Durham and London: Duke University Press, 1997.
- Human Rights Watch. 2000. *Colombia: The Ties that Bind: Colombia and Military-Paramilitary Links*. 12 (1).
- Jelin, Elizabeth y Eric Hershberg (eds.). *Constructing Democracy: Human Rights, Citizenship and Society in Latin America*. Boulder (Colorado): Westview Press, 1996.
- Keane, John. *Civil Society. Old Images, New Visions*. Stanford: Stanford University Press, 1998.
- Lechner, Norbert. "La problemática invocación de la sociedad civil", *Revista Foro*, N° 28, enero de 1996, pp. 24-33.
- Melucci, Alberto. "Social Movements and the Democratization of Everyday Life", in John Keane (ed.), *Civil Society and the State*. New York: Verso, 1993, pp. 245-260.
- Padilla, Nelson Freddy. "Estamos en la dolorosa". *Cambio* 16, N° 164, agosto 5 de 1996.
- Roseberry, William. "Hegemony and the Language of Contention", in Joseph Gilbert and Daniel Nugent (eds.), *Everyday Forms of State Formation. Revolution and the Negotiation of Rule*

- in Modern Mexico*. Durham and London: Duke University Press, 1994, pp. 367-377.
- Santana, Pedro. "Modernidad y democracia", en *Modernidad y sociedad política en Colombia*. Bogotá: Fescol, Ediciones Foro por Colombia, Iepri, 1993, pp. 237-315.
- . 1992. "Los partidos políticos y la democracia en Colombia", *Revista Foro*, N° 17, 1992, pp. 44-55.
- Semana*, N° 872. "Tirofijo se destapa. Por primera vez el jefe de las Farc habla sobre el canje y el proceso de paz", enero 18 de 1999, Bogotá.
- Sibley, David. *Geographies of Exclusion*. New York: Routledge, 1995.
- Taylor, Charles. "The Politics of Recognition", in John Arthur and Amy Shapiro (eds.), *Campus Wars. Multiculturalism and the Politics of Difference*. Boulder (Colorado): Westview Press, 1995, pp. 249-263.
- Uprimny, Rodrigo y Alfredo Vargas Camacho. "La palabra y la sangre: violencia, ilegalidad y guerra sucia en Colombia", en Germán Palacio (compilador), *La irrupción del paraestado*. Bogotá: ILSA, Cerec, 1989, pp. 105-165.
- Walzer, Michael. "Constitutional Rights and the Shape of Civil Society", en Rober E. Calvert (ed.), *The Constitution of the People. Reflections on Citizens and Civil Society*. Texas: Lawrence University Press, 1991, pp. 113-126.
- Young, Iris Marion. "Social Movements and the Politics of Difference", in John Arthur and Amy Shapiro (eds.), *Campus Wars. Multiculturalism and the Politics of Difference*. Boulder (Colorado): Westview Press, 1995, pp.199-223.
- . *Justice and the Politics of Difference*. Princeton: Princeton University Press, 1990.

Henry Salgado Ruiz

PROCESOS Y ESTRATEGIAS SOCIO-ORGANIZATIVAS EN
EL GUAVIARE

PRESENTACIÓN

Las marchas cocaleras de los meses de junio y julio de 1996 en regiones del Guaviare, Putumayo, Caquetá, Cauca, Norte de Santander y el sur de Bolívar suscitaron de nuevo muchos interrogantes frente a los movimientos sociales. ¿Cómo explicar la movilización de más de 200.000 personas en zonas de economía cocalera? ¿Qué factores subjetivos y objetivos generaron esta masiva movilización? ¿En la base de estas movilizaciones está la exigencia por la apertura de canales de participación política y de soluciones socioeconómicas a los campesinos que viven en las zonas de colonización? ¿Fueron las fumigaciones aéreas a los cultivos ilícitos y las medidas de control de insumos para el procesamiento de pasta básica de cocaína, emitidas por el gobierno de Samper, las que provocaron *ipso facto* la reacción masiva? ¿Fueron los campesinos obligados a movilizarse por el movimiento insurgente? ¿Las marchas campesinas obedecen a procesos organizativos que los campesinos vienen tejiendo desde tiempo atrás?

Cómo explicar este fenómeno social a partir no sólo de lo visible, de lo presente y activo –de lo que estaba sucediendo en cada una de estas zonas y de lo que los medios de comunicación estaban registrando diariamente–, sino también del estudio de lo no visible, de las dimensiones socioculturales y políticas que

posibilitaron el movimiento social: estudio de las redes sociales preexistentes, de las construcciones discursivas, de las orientaciones de la acción, de los lazos de solidaridad.

Para poder acercarnos a estas dimensiones no visibles de las movilizaciones en zonas cocaleras, en el Instituto Colombiano de Antropología –ICAN– tomamos la decisión de estudiar las características de este evento en la parte occidental de la región amazónica. Decidimos adentrarnos en el estudio de las redes sociales y procesos organizativos en los departamentos del Putumayo, Guaviare y Caquetá.

Para este III Encuentro del Observatorio Sociopolítico y Cultural del Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional, he querido centrarme en el Guaviare y exponer las dinámicas organizativas que están en la base de las marchas cocaleras de 1996.

Sin duda alguna, tratar de explicar lo que había acontecido en este departamento no era fácil. Cuando emprendí el intenso trabajo de campo en la zona, comencé a revisar también las diferentes teorías existentes en torno a los movimientos sociales. ¿Podría explicar la movilización social ocurrida en esta zona de colonización guiado por las perspectivas conductistas (Smelser, 1963; Gurr, 1970) que presentan a la acción colectiva y a los individuos como elementos marginales y negativos y a la movilización como un fenómeno disfuncional impulsado por las frustraciones y las subsecuentes agresiones nacidas de la privación a que son sometidos los colonos por el distanciamiento, la soledad y precariedad económica propia de las zonas de frontera? El modelo de Smelser y Gurr evidentemente me limitaba para interpretar los complejos sucesos sociales que se han tejido en la región amazónica y, de manera específica, en el departamento del Guaviare.

Afirmar de manera simple que toda acción colectiva es anormal y disfuncional frente al “orden social establecido” era ob-

viar, sin responder, los interrogantes planteados por las teorías sociales fundadas en conceptos como las clases o las categorías sociales (Múnera, 1998: 28) y, a su vez, esquivar los problemas relacionados con la estructura de tenencia de la tierra y los procesos históricos que crearon las condiciones críticas y difíciles que en la actualidad enfrentan los pobladores de las zonas de colonización. Tampoco consideré como pertinente el modelo interpretativo sugerido por Olson (1968), quien explica la acción colectiva desde la lógica de la racionalidad económica.

Para este autor, a diferencia de Smelser y Gurr, las revoluciones y otras formas de acción “colectiva” no son motivadas por sentimientos psicológicos de privación o de interés en relación con fines sociales; para él, sólo la expectativa de un provecho particular da motivos a los individuos para comprometerse políticamente. Como anotan Dalton, Kuechler y Bürklin (1992: 26), se trata de un modelo de elección racional del actor, en el cual los individuos no participarán en amplias acciones colectivas, a menos que los “beneficios” esperados superen los “costos” de su participación. De no ser así, la persona racional se abstendrá y obtendrá sin esfuerzo los beneficios colectivos. Este modelo interpretativo exige trabajar con el concepto de racionalidad económica capitalista y centrarse en el estudio de las gratificaciones económicas y políticas individuales. Con este modelo teórico hubiera perdido de vista cualquier noción que haga referencia al altruismo o al beneficio social colectivo y, además, hubiera ignorado, por el predominio de una mirada unidimensional y económico-instrumental, las múltiples lógicas discursivas e ideológicas que han nacido en los nuevos espacios sociales y culturales de la Amazonia.

El interés de la investigación estaba centrado fundamentalmente en examinar la acción colectiva que había tenido lugar en la Amazonia occidental, y en relacionarla de manera directa con los discursos ideológicos y las redes sociales preexistentes

en el área. En este sentido, y asumidas como herramientas, aproveché las diferentes teorías que coinciden en señalar que la acción colectiva comienza no sólo por organizaciones, sino por grupos, redes o cadenas informales de personas que tienen relaciones entre sí, que no son individuos aislados, sino que forman redes sociales y que empiezan desde allí a construir determinadas orientaciones discursivas y de sentido y a generar formas diferentes de entenderse (Melucci, 1993; 1996; Escobar y Álvarez, 1992). En esta búsqueda teórica sobre movimientos sociales me apoyé, además de Melucci, Escobar y Álvarez, en autores como McCarthy, McAdam y Zald (1996), quienes desde la teoría de la movilización por recursos y las perspectivas de la construcción de identidades políticas proporcionan un valioso marco conceptual para el estudio de los movimientos sociales. Estos autores obligan a centrar la atención en las organizaciones que le dan sentido y dirección al movimiento social, y subrayan la importancia de la iniciativa individual en la creación y conducción de dichas organizaciones.

Tomando como marco de referencia teórica a los mencionados autores, he querido demostrar en esta ocasión que las marchas campesinas que han tenido lugar en el Guaviare –fundamentalmente los éxodos de 1985 y 1986 y las marchas cocaleras de 1995 y 1996– son la punta del iceberg de procesos organizativos dinamizados desde tiempo atrás por líderes agrarios de orientación comunista. Demostraré que a la natural vocación colectiva y asociativa de los colonos del Guaviare, es necesario agregarle la experiencia de líderes campesinos que desde la lucha por la tierra han recogido la ya larga trayectoria organizativa agraria del Partido comunista, y que bajo la orientación política y organizativa de estos líderes se impulsó y consolidó una organización sindical que, al tiempo que defendió los intereses gremiales de los pequeños agricultores del Guaviare, se constituyó en una autoridad política que cubrió el déficit de representatividad institucional del

Estado y conquistó la legitimidad social de sus objetivos y medios de acción.

DE LA ORGANIZACIÓN POR NECESIDAD A LA ORGANIZACIÓN POLÍTICO GREMIAL DE LOS CAMPESINOS

El Comité de colonos: de la alianza por necesidad a la organización político gremial

Las primeras formas organizativas de los campesinos-agricultores del Guaviare surgieron en el marco propio de las necesidades que enfrentaron en su proceso de asentamiento. La familia fue, sin lugar a dudas, un *espacio de sociabilidad* inicial importante y la que aportó los primeros brazos para “domesticar” la selva, pero el encuentro con los vecinos abrió nuevas posibilidades y esperanzas. Estos niveles de apoyo doméstico y de intercambio de mano de obra con sus pocos vecinos constituyeron el primer germen organizativo en el Guaviare. *Las alianzas se daban en el marco de las necesidades propias de los nuevos asentamientos humanos*. Estos primeros vínculos y la llegada paulatina y progresiva de más población fueron constituyendo los primeros lazos de solidaridad y, con ello, la construcción de nuevos discursos y sentidos, nuevas formas de decir, de hacer y de entenderse (Melucci, 1993, 1996; Escobar y Álvarez, 1992).

Estas primeras alianzas entre colonos, no obstante, no se transformaron inmediatamente en instancias organizativas formales. Cuando se estaban fortaleciendo las solidaridades entre los colonos y estaban emergiendo las primeras organizaciones de carácter comunitario-veredal, la coca emergió en el contexto guaviareño como un cultivo que retrasó de manera significativa las dinámicas organizativas y desestructuró algunas relaciones de parentesco y compadrazgo que habían surgido en el desarrollo de los primeros asentamientos.

El trabajo organizativo en contextos sociales y agrarios en donde empezaban a predominar los cultivos ilícitos no fue sencillo. Los líderes que se formaron en el marco de las primeras urgencias de los colonos, así como líderes de orientación comunista que ingresaron al Guaviare a comienzos de los años ochenta, tuvieron que trabajar muy duro para restablecer las solidaridades y crear formas organizativas de mayor alcance.

La primera instancia organizativa de carácter interveredal surgió en Calamar en 1981. Se le denominó Comité de Colonos o Comité Cívico-Campesino¹. En esencia, se trataba de un trabajo organizativo orientado a generar cohesión comunitaria, a promover la organización político-gremial de los campesinos y a crear las bases sociales y políticas que le darían el soporte y la continuidad a dicha organización.

Pese a la corta vida del Comité de Colonos (1981-1983), es necesario señalar que fue a través de esta dinámica organizativa que se logró reactivar en muchos campesinos su pasado de lucha y liderazgo y se empezó a tejer una identidad política y social en los campesinos del Guaviare, inicialmente en La Libertad y Calamar y posteriormente en Miraflores.

Con un trabajo continuo y sistemático, el Comité de colonos logró conquistar la simpatía de muchos de los campesinos de la zona y, además, identificar líderes comunitarios que empezaron a ejercer un rol central en sus veredas y a ser interlocutores fundamentales de los líderes agrarios fundadores del comité. En rigor, se puede afirmar que en el transcurso de dos años los líderes agrarios del Guaviare pudieron construir las bases sociales y políticas para impulsar y organizar un ente organizativo de mayor alcance y de carácter político-gremial.

¹ Entrevista con Roberto Castro, Calamar, octubre 31 de 1998.

CONFORMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICO-GREMIAL DE LOS CAMPESINOS DEL GUAVIARE

El SINPAG: Organización gremial y política de los campesinos

Con el Comité de Colonos, los líderes agrarios empezaron a construir las bases sociales y políticas que le darían vida y continuidad al Sindicato de Pequeños Agricultores del Guaviare, SINPAG, una de las organizaciones más fuertes y de mayor incidencia en los procesos sociales y políticos que han tenido lugar en el Guaviare desde 1983 hasta 1998. Se trataba de un sindicato que al tiempo que buscaba representar los intereses gremiales de sus asociados, impulsaba objetivos y acciones de carácter político. Para comprender la relación existente entre una organización formada para dinamizar procesos sociales de carácter reivindicativo y gremial y el modo de acción política de sus líderes, Offe anota lo siguiente: "Una exigencia mínima para poder calificar de 'político' un modo de actuar es la de que su autor pretenda de alguna forma explícitamente que se reconozcan como legítimos sus *medios* de acción y que los *objetivos* de la acción sean asumidos por la comunidad amplia"².

Desde el trabajo comunitario iniciado con el Comité de Colonos los líderes agrarios comenzaron a formar en las veredas núcleos organizativos integrados por personas con carisma o de reconocido prestigio en sus veredas. Estos núcleos veredales³ tenían la misión de ampliar la base social de apoyo de la organización y ganar el respaldo político de los líderes naturales de la

² Claus Offe (1990: 175).

³ Aclaramos que la denominación de núcleos veredales no hace referencia a una instancia formalmente existente dentro de la estructura del Comité de colonos o del SINPAG; es la manera como en este trabajo interpretamos un modo de acción político-organizativo que ha tenido lugar en la región.

región. Los campesinos que asumieron este rol en las veredas se constituyeron en verdaderos líderes políticos y gremiales del campesinado. En estos líderes campesinos los directivos sindicales depositaron diversas responsabilidades: constituir y fortalecer las juntas de acción comunal, ser interlocutores frente a las autoridades estatales (corregidores, inspectores de policía) y militares, y en la mayoría de los casos, asumir la vocería política de la Unión Patriótica (UP) y la puesta en marcha de la estrategia política veredal de este movimiento político: las Juntas Patrióticas.

SINPAG: autoridad política de la región

Desde su nacimiento, el SINPAG se asumió y fue reconocido como una *autoridad*. Pese a que se definía como una organización gremial organizativa, desde sus inicios comenzó a cumplir funciones de Inspección de Policía. Al sindicato llegaban las personas a resolver sus problemas personales, de pareja, de linderos de tierras. Los campesinos preferían a los directivos del sindicato como intermediarios para resolver sus problemas; muy raras veces la gente acudía al corregidor, que era la autoridad estatal de los años ochenta.

Los campesinos del Guaviare encontraron en el SINPAG un espacio para exponer sus problemas, sus quejas, sus conflictos interpersonales, sus anhelos, sus sueños. Se trata de personas que, cansadas de hablarle a un Estado inexistente —un ente invisible y/o con oficinas mal dotadas, sin presupuesto y con bajo o nulo nivel operativo—, optaron por acoger como autoridad a la organización sindical. Ésta empezó a jugar las veces de Estado local y de organización gremial. El sindicato se constituyó en la institución que tenía la capacidad de ejercer en nombre de la comunidad los controles, la representación frente a las autoridades locales y regionales y la defensa de los derechos de los campesinos.

El SINPAG fue visto por los colonos como una organización que supo dimensionar la problemática campesina en contextos agrarios donde predominan los “cultivos ilícitos”, y que asumía la vocería para argumentar y defender sus derechos ante las autoridades estatales locales, regionales e incluso nacionales. El SINPAG entró en el Guaviare a llenar el gran vacío que el Estado ha dejado en estas zonas de colonización, y cubrió con su presencia el déficit de representatividad institucional existente⁴.

Los líderes sindicales no sólo trabajaban con los campesinos hombro a hombro en la resolución de sus problemas más inmediatos; también mostraron la capacidad de ser interlocutores válidos e informados frente a las autoridades estatales civiles y militares. Se trataba de personas que tenían la destreza de manejar varias gamas y formas del lenguaje. Cuando dialogaban con las comunidades predominaba un manejo de códigos lingüísticos propios de los campesinos; cuando se sentaban en una mesa de negociaciones con funcionarios del Estado utilizaban códigos lingüísticos mucho más elaborados. Este manejo de formas y espacios de la comunicación nos muestra que se trataba de líderes que dominaban diferentes *campos culturales*, para expresarnos en términos de Bourdieu⁵, y que a partir de este dominio de los *campos* lograban traducir los significados, valores y normas de un lenguaje a otro, seleccionar los contenidos de un idioma local para usarlos en otro.

Paulatinamente, el SINPAG fue construyendo en el Guaviare su propia legitimidad. Los líderes con sus acciones y discursos fueron “explicando” los objetivos planteados por la organización

⁴ Para ampliar el concepto de déficit de representatividad, véase la introducción del libro de Daniel Pécaut (1989).

⁵ Para Bourdieu, un *campo* lo constituyen dos elementos: la existencia de un capital común y la lucha por su apropiación. Véase Bourdieu (1988), especialmente el capítulo IV “La dinámica de los campos” y García Canclini (1990).

y ganando consenso en torno a los *medios* requeridos para lograr el éxito de los propósitos perseguidos. Apoyados en los análisis fenomenológicos, podemos plantear que el SINTAG fue tejiendo en la comunidad del Guaviare –de manera específica en Calamar, La Libertad y Miraflores– un modo de interpretar la realidad social y de actuar para transformarla. Progresivamente, los campesinos que apoyaban al SINTAG fueron comprendiendo por qué se *debía* realizar una acción y no otra y por qué las cosas *eran* lo que eran⁶.

Los directivos sindicales trabajaron de manera continua y constante en torno a la validación social de sus *medios* de acción y de los *objetivos* perseguidos por esas acciones. Se trataba de acciones y prácticas discursivas que se validaban básicamente a partir de tres estrategias, a saber:

1. Reflexión comunitaria cotidiana sobre los más relevantes problemas de la región (campañas de sensibilización y concientización campesina).

2. Crítica permanente a la precariedad del Estado en la región y su incapacidad y falta de voluntad política para resolver los problemas prioritarios identificados (prácticas discursivas orientadas a erosionar de manera progresiva la lábil legitimidad existente del Estado en la región).

3. La promoción y dinamización de acciones colectivas institucionales y extrainstitucionales como único recurso campesino para ser escuchados y canalizar las múltiples tensiones sociales presentes en esta región.

⁶ Berger y Luckmann (1995: 122) arguyen que la legitimación no sólo indica al individuo por qué *debe* realizar una acción y no otra, sino que también le indica por qué las cosas *son* lo que son. Para estos autores, la legitimación involucra tanto el elemento cognoscitivo como el elemento normativo. Al respecto Berger y Luckmann dicen: “La legitimación ‘explica’ el orden institucional atribuyendo validez cognoscitiva a sus significados objetivados. La legitimación justifica el orden institucional adjudicando dignidad normativa a sus imperativos prácticos”.

Con la implementación de estas estrategias, el SINPAG ganó mayor audiencia y amplió de manera significativa su base social y política de apoyo. Muchos campesinos encontraron allí una entidad que representaba sus intereses; sin embargo, el discurso políticogremial impulsado por los líderes agrarios no tuvo un apoyo irrestricto ni homogéneo. Para otros campesinos y personas vinculados al comercio o al sector educativo, el SINPAG era una entidad con marcados matices de autoritarismo.

Aunque se reconocía el rol central de autoridad que ejercía el sindicato, no se estaba de acuerdo con directrices emanadas de los líderes sindicales y, sobre todo, con el modo de actuar que asumieron algunos líderes veredales. El poder que les fue atribuido a estos líderes agrarios fue en muchas ocasiones ejercido de manera autoritaria, llegándose incluso a cometer abusos y arbitrariedades que hirieron susceptibilidades personales y crearon terrenos en donde prosperaron rencores y profundos desafectos y/o indiferencia hacia cualquier propuesta organizativa. Aunque ésta no fue una actitud generalizada de los líderes veredales del SINPAG, sí afectó su avance en algunas veredas.

Sin embargo, los días del SINPAG en Miraflores, Calamar, La Libertad y El Retorno estaban contados. El ejercicio de autoridad ejercido por el SINPAG fue rápidamente perseguido por las Fuerzas Militares. Luego de acusar a los directivos del SINPAG de ser guerrilleros y/o auxiliares de la guerrilla, la VII Brigada del Ejército Nacional comenzó una fuerte persecución contra todos los directivos y asociados del sindicato. Esto provocó el refugio y la salida de la región de algunos líderes del sindicato y un cambio sustantivo en la estrategia organizativa. El SINPAG se vio obligado a ejercer sus funciones de manera clandestina y empezó a fortalecer el trabajo desde (y con) las juntas de acción comunal.

El SINPAG y su trabajo organizativo desde el movimiento comunal

Luego de la fuerte arremetida que emprendió la VII Brigada contra los líderes agrarios del Guaviare, el SINPAG se vio obligado a ejercer sus funciones de manera clandestina y empezó a fortalecer su trabajo desde las juntas de acción comunal. Para algunos líderes, la fuerte represión militar estaba provocando una involución en el proceso organizativo de los campesinos del Guaviare. El salto significativo del Comité de Colonos al SINPAG parecía devolverse.

Sin embargo, luego de intensas y acaloradas discusiones entre los líderes agrarios, se tomó la decisión de crear la Junta Central (1984), que reunía todas las juntas de acción comunal de Calamar. Esta Junta Central conservó los principios políticos y gremiales del SINPAG y se encargó de orientar y promover la creación y consolidación de las juntas de acción comunales, y de la canalización de los contratos con entidades estatales como el PNR, que para esa época empezaba a tener presencia en la región.

Sin embargo, es necesario anotar que si bien la Junta Central fue “la madre del movimiento comunal”, ésta no tenía el control sobre todo el proceso de expansión de las juntas de acción comunal (JAC) en el Guaviare. De hecho, como se señaló anteriormente, algunos líderes de la región habían generado en determinadas veredas cierta aversión hacia el discurso de orientación comunista y sobre todo a las prácticas autoritarias que se habían impuesto. Esto posibilitó, en cierta medida, la inserción de los partidos políticos tradicionales en muchas de las veredas y la toma por parte de éstos de algunas juntas directivas comunales.

Con la creación de las juntas de acción comunal, entonces, el SINPAG pudo continuar su proceso organizativo, aunque esta vez compartido y disputado con otras orientaciones políticas e ideológicas.

Las personas que estaban vinculadas desde el Comité de colonos, en lo que hemos denominado en este trabajo los núcleos veredales, tuvieron durante los procesos organizativos jalonados desde las juntas de acción comunal un intenso y arduo trabajo, pues en estos núcleos recayó buena parte del trabajo ideológico y político. Estaba en sus manos volverse a ganar la confianza de los *líderes naturales*, quienes, ya sea por pragmatismo o por reacción frente a las prácticas autoritarias adelantadas por los líderes agrarios, habían decidido acercarse al accionar politiquero de los partidos tradicionales. Estos núcleos veredales tenían en sus manos la tarea de evitar una fragmentación del movimiento comunal y de darle a éste el alcance de fuerza social, gremial y política con capacidad de interlocución frente al Estado y otros sectores sociales.

LOS NÚCLEOS VEREDALES, UNA ESTRATEGIA POLÍTICA Y ORGANIZATIVA

Estrategia de cuadros y combinación de las formas de lucha

Desde que se empezó a estructurar el Comité de Colonos, los líderes de orientación comunista que arribaron al Guaviare a comienzos de los años ochenta emprendieron la tarea de identificar a los líderes de las veredas y a organizar en ellas núcleos de personas que estuvieran de manera permanente al frente de las tareas propias del proceso político-organizativo que se estaba impulsando en el Guaviare. Se trataba de la estrategia leninista de “conformación de cuadros”, consistente en identificar y comprometer a las personas más sobresalientes de las veredas, para impulsar procesos organizativos.

Si bien, como vimos anteriormente, fue el SINPAG el que fomentó políticas orientadas a la sensibilización y concientización campesina, a la erosión de la legitimidad estatal existente en la región y a la dinamización de acciones colectivas institucionales y extrainstitucionales, es necesario señalar que fue en los núcleos veredales en donde recayó buena parte de este trabajo. Este trabajo político-ideológico estuvo centrado más en la práctica que

en el discurso. Trabajando hombro a hombro con los campesinos, los líderes agrarios de la región fueron ampliando su radio de influencia ideológica y ganando amigos y partidarios. La experiencia sindical y política de los líderes agrarios del Guaviare les había enseñado a darle prioridad a la práctica por encima de los discursos teóricos.

Uno de los problemas más serios que tuvieron que enfrentar los líderes agrarios del Guaviare fue el de diferenciar ante el gobierno y la opinión pública sus acciones político-organizativas de las acciones político-militares del movimiento insurgente. Este trabajo, sin duda alguna, no era sencillo, ya que tanto nacional como regionalmente el Partido Comunista venía hablando de la combinación de las formas de lucha.

El problema que enfrentaban los líderes, entonces, no era tanto de orden ideológico, ya que para ellos la táctica de la combinación de las formas de lucha era la consecuencia de la violencia desatada desde los años cuarenta y cincuenta contra los campesinos y los sectores populares. De hecho, una de las iniciativas que impulsaron los líderes agrarios del Guaviare, tanto desde el Comité de Colonos como desde el SINPAG, fue la dinamización de acciones colectivas institucionales y extrainstitucionales. La experiencia de lucha agraria y sindical les había enseñado que recurriendo a los mecanismos formales de petición establecidos por el Estado no iban a lograr nada. Frente a un escenario de promesas nunca cumplidas y de creciente incredulidad, las acciones extrainstitucionales fueron cada vez más recurrentes, y fueron conquistando de manera paulatina y creciente su legitimidad social. Parafraseando a Rolf Schroers en su documento referido a la situación de los partisanos, los líderes del Guaviare nunca han tenido problema en probar ilegalmente la validez del derecho recusado⁷.

⁷ Rolf Schroers (1962: 48).

Sin embargo, sí estaba en el interés de estos líderes agrarios el que los medios usados para la conquista de sus objetivos político-organizativos fueran diferenciados de los medios militares empleados por los guerrilleros de las FARC. Pese a considerar plausible y legítimo el recurso a la lucha armada como una vía para la defensa de los derechos de los campesinos, los líderes agrarios estaban interesados en mostrar que sus planteamientos ideológicos no los convertían *ipso facto* en guerrilleros. Una cosa era compartir en la esfera de las ideas políticas la necesidad de la lucha armada en esas regiones, y otra muy diferente la pelea cotidiana que tenían que dar los líderes agrarios para que su trabajo político-organizativo no fuera subsumido por las dinámicas de la guerra.

No fue sencillo para los líderes agrarios del Guaviare ganar espacios políticos frente a las fuertes tendencias militaristas que paulatinamente se fueron afianzando en la región. Su trabajo político-organizativo impulsado de manera clandestina y cerrada desde los núcleos veredales, concomitante con su trabajo amplio de organización sindical y de fortalecimiento del movimiento comunal, los fue posicionando políticamente en la región. Tal fue el grado de autoridad política adquirida que, como lo vimos anteriormente, el SINPAG se constituyó rápidamente en una autoridad política de la región, y sus líderes, en interlocutores inevitables tanto para las autoridades estatales como para el movimiento insurgente. Progresivamente, las FARC empezaron a validar y reconocer el trabajo político que se estaba adelantando en la región.

Este nivel de respaldo de parte del movimiento insurgente de las FARC hacia las organizaciones político-gremiales de los campesinos del Guaviare fue un proceso ganado paulatinamente por los líderes agrarios. Como lo reconocen algunos líderes de la región, fue necesaria una serie de reuniones en donde, al tiempo que se intercambiaban ideas políticas, se explicaban los

horizontes perseguidos por las acciones de carácter político-organizativo impulsadas desde el Comité de Colonos, inicialmente, y, posteriormente, desde el SINPAG y las juntas de acción comunal.

En esta relación, los núcleos veredales jugaron el papel de bisagras entre el movimiento insurgente y las organizaciones político-organizativas del campesinado guaviarense. Por una parte, en el seno de los núcleos veredales se maduraban ideales comunistas y se impulsaban acciones colectivas y, por otra parte, eran éstos el escenario social por excelencia en donde se formaban y afianzaban los mejores cuadros políticos que se iban a dedicar a la guerra o a la política activa⁸. Eran, para expresarnos en los términos de Carl Schmitt, “la escuela donde se formaban los partisanos”⁹.

Del trabajo político-organizativo a la ocupación de los espacios políticos institucionales

El trabajo político-organizativo adelantado por líderes agrarios del Guaviare, tanto desde el Comité de Colonos y del SINPAG,

⁸ Cuando decimos que los núcleos veredales eran una escuela de cuadros políticos que se iban a dedicar a la guerra o a la política activa, no estamos afirmando que allí se impartiera adiestramiento militar, sino que se formaban cuadros políticos que en muchas ocasiones tomaban *la decisión personal* de vincularse al movimiento insurgente. Cuando esto ocurría, estas personas ingresaban a las FARC como “cuota del Partido”. Así se les denomina a los guerrilleros formados política e ideológicamente por el Partido Comunista.

⁹ En un esfuerzo por definir al partisano, Carl Schmitt (1963: 123) anotaba: “El partisano combate dentro de una formación política y justamente el carácter político de sus acciones valoriza el significado originario de la palabra *partisano*. En efecto, este término deriva de partido y remite al vínculo con una parte o con un grupo de algún modo combatiente, ya sea en guerra, ya en política activa. Los vínculos con un partido de esta naturaleza se vuelven particularmente fuertes en épocas revolucionarias”.

como desde el movimiento comunal, se centró fundamentalmente, aunque no exclusivamente, en las veredas de la región. En estos espacios socioculturales fue donde implementaron su “estrategia de cuadros”, a través de la creación de lo que hemos denominado los núcleos veredales, y en donde tuvieron que relacionarse de manera directa e inevitable con el movimiento insurgente. Decimos inevitable, ya que fue y ha sido en las veredas en donde se desenvuelve la vida cotidiana del movimiento insurgente. Si bien su presencia no se da en todas las veredas ni son éstas los sitios de residencia de los guerrilleros(as), el nivel de relación entre los pobladores de las veredas y el movimiento insurgente es permanente. Los guerrilleros(as) acuden a las veredas, entre otros aspectos, a adquirir artículos de consumo, a dialogar con sus amigos y amigas, a entrevistarse con los líderes de las juntas de acción comunales, a participar en las reuniones comunitarias, a resolver conflictos interpersonales y de pareja y a dar orientaciones de carácter político e ideológico¹⁰.

Los líderes agrarios de la región estaban permanente movilizados por la idea de no ver limitadas sus luchas y reivindicaciones a lo estrictamente gremial-comunitario. En el imaginario político de estos líderes, el trabajo puntual y reivindicativo adelantado en las veredas a través de las juntas de acción comunales, y el trabajo interveredal y de alcance regional dinamizado desde el SINPAG, eran significativos en la medida en que tuvieran una dimensión política. Para estos líderes la acción local no podía estar desligada del desarrollo local y regional. Esta perspectiva integral de la acción fue parte fundamental del pensamiento que se reproducía en y desde los núcleos veredales. Allí

¹⁰ Es necesario tener presente que el movimiento insurgente es la autoridad político-militar de municipios como Miraflores y Calamar, y de un significativo número de veredas de El Retorno y San José del Guaviare.

se empezaron a formar campesinos que tuvieran, además de sus aspiraciones socioeconómicas, aspiraciones políticas. Se buscó de manera permanente que las campesinas contemplaran la posibilidad política de ser ellos mismos los conductores de su propio desarrollo. Esta idea era parte de la orientación política-ideológica que los líderes agrarios impartían desde sus diferentes instancias organizativas.

Este tipo de argumentos políticos empezaron a cobrar mayor fuerza desde la administración de Belisario Betancur (1982-1986). Durante este gobierno se empezó a impulsar un proceso de diálogo y negociación con el movimiento insurgente –que ofrecía amnistía y ayuda a los antiguos guerrilleros y reforma política y creación de espacios democráticos para el debate y la concertación–, y además se creó el Plan Nacional de Rehabilitación, como mecanismo complementario, orientado a solucionar los problemas socio-económicos de las regiones marginadas.

Para los líderes del Guaviare este momento político creó condiciones especiales y favorables para continuar, esta vez con mayor ímpetu, su proselitismo político. Aprovechando el trabajo organizativo que venían impulsando desde 1981 con el Comité de colonos y contando con el apoyo de líderes naturales y copartidarios que estaban al frente del SINPAG y de las juntas de acción comunales, algunos líderes agrarios de orientación comunista se dedicaron de forma exclusiva al trabajo político, se dieron a la tarea de empezar a difundir y proponer ideas sobre lo que entendían por la paz para la región. Para ellos, la solución del conflicto armado suponía el logro de objetivos políticos relacionados con los derechos humanos, el medio ambiente y la promoción del desarrollo. Este trabajo político lo adelantaron los líderes agrarios del Guaviare de la mano con las FARC, quienes venían negociando con la administración Betancur un cese al fuego y firmaron el acuerdo de tregua con el gobierno en La Uribe (Meta), el 28 de marzo de 1984.

En el marco de la tregua, que entró en vigencia dos meses después de firmado el acuerdo, las FARC lanzaron la idea de la creación de la Unión Patriótica (UP) como una propuesta que buscaba aglutinar a los diferentes sectores inconformes del país que no estuvieran de acuerdo con la dinámica de los partidos tradicionales y quisieran luchar por “la defensa de la nacionalidad, de la soberanía y de la independencia de Colombia, por la reforma política de las costumbres políticas viciadas, por la defensa de los derechos cívicos, por la ampliación de la democracia, por la paz con justicia social”¹¹.

En el Guaviare fueron muchos los líderes que se vincularon a esta iniciativa política de las FARC. Encontraron allí un terreno abonado para continuar trabajando por la concreción de sus ideales. Desde este movimiento, además de luchar por las reivindicaciones propias de la región, estos líderes se convirtieron en actores políticos que empezaron a opinar sobre los grandes problemas del país.

La principal forma organizativa creada por la Unión Patriótica para impulsar su trabajo político fueron las Juntas Patrióticas. Estas Juntas Patrióticas fueron impulsadas y puestas en marcha rápidamente en el Guaviare. A ellas se unieron no sólo los líderes agrarios de orientación comunista, sino también líderes naturales de la región y personas que venían trabajando de manera clandestina desde los núcleos veredales, y cuya presencia y participación en las asambleas comunitarias se había caracterizado, para expresarnos en términos académicos, por ser de bajo perfil. A este espacio también concurrieron personas que estaban ligadas al movimiento insurgente, pero que por razones de orden político y personal encontraban en las juntas la posibilidad de retirarse del mundo de las armas y vincularse al trabajo político-organizativo con la comunidad.

¹¹ José Arizala (1989: 160).

ÉXODOS Y MARCHAS CAMPESINAS

Como se ha observado, desde comienzos de los años ochenta en el Guaviare se han impulsado procesos organizativos de significativa importancia, a partir de los cuales podemos interpretar las acciones colectivas que allí han tenido lugar. Se trata de éxodos o marchas campesinas orientadas todas a exigir solución a los múltiples problemas socioeconómicos y políticos que enfrentan los pobladores de la región.

En 1985 la Asociación de Juntas de Acción Comunal del Guayabero y el Sindicato de Pequeños Agricultores del Guaviare impulsaron y lideraron la primera gran marcha de campesinos hacia San José del Guaviare. Ésta fue provocada por un proceso agudo de militarización de La Carpa y La Macarena y fue canalizada por sus líderes para exigir vías de comunicación, escuelas, centros de salud, etc., es decir, para levantar un pliego de peticiones en donde se consignaron todas las necesidades inherentes a las zonas de colonización, una “verdadera lista de mercado”, como lo expresaría años después uno de los líderes de la protesta.

Un año después, la asociación de juntas y el sindicato promueven de nuevo una segunda gran marcha, esta vez para exigir el cumplimiento de los acuerdos pactados el año anterior. Como protesta, los pobladores del Guaviare llenaron de maíz, yuca y plátano la iglesia, los colegios y escuelas de San José. Se trataba esta vez de protestar contra una de las promesas del gobierno, que consistía en que el Idema se encargaría de comprar la producción campesina de la región. Finalmente, estos productos se perdieron y la gente regresó a sus fincas con el cansancio de la marcha y con algunos problemas solucionados. La adecuación de algunos puestos de salud, la creación de un internado en Calamar y creación de escuelas en algunas veredas fueron puntos conquistados, pero aún continuaban con su problema

mayor: cómo sustituir los cultivos ilícitos y crear un bienestar campesino en el Guaviare. Este problema aún permanece sin solución.

En 1988 la movilización campesina fue para solicitar el levantamiento de la Reserva de la Macarena y garantizar la consolidación de una colonización que hacía presencia allí por espacio de más de una década. Una y otra vez los colonos han marchado a sus cabeceras municipales para exigir solución a sus demandas. Las últimas marchas (1995 y 1996) fueron contra las fumigaciones a los cultivos ilícitos y contra las medidas de control de insumos para el procesamiento de pasta básica de cocaína (cemento y gasolina).

Se trata de protestas campesinas que han sido permanentemente anatematizadas y que, pese a la fuerza de su expresión, no han logrado abrir canales democráticos de participación política ni han encontrado solución integral a su principal problema: el de los cultivos ilícitos. En la actualidad el Guaviare ha dejado de ser el principal cultivador de coca y procesador de pasta básica de cocaína. Esto ha incrementado de manera sensible la pobreza en la zona. La solución a sus problemas está cada vez más lejana, la zona de reserva campesina que se está implementando en Calamar camina de manera lenta y sus habitantes temen la solución ofrecida por la actual administración a través del Plan Colombia. Lo que se espera con este plan es el incremento del conflicto armado en la zona.

Los lazos de solidaridad, los discursos y acciones compartidos, las redes sociales, no han sido aún desestructuradas en el Guaviare. Con el ingreso de los organismos paramilitares se atacó fuertemente la estructura de las redes sociales; sin embargo, éstas no fueron fácilmente fraccionadas, resistieron. Los golpes que recibieron fueron muy fuertes, pero aún existen y se amplían en el corazón del Guaviare. Son estas redes las que han posibilitado los permanentes levantamientos y protestas campesinas en

la zona. Es muy posible que dentro de poco nos despertemos de nuevo con la noticia que nos habla de marchas campesinas que se dirigen a San José del Guaviare, a Mocoa, a Florencia o a Bogotá. Se tratará de movilizaciones campesinas que, con toda seguridad, tendrán que sumarle a sus reivindicaciones tradicionales el desmonte de la última medida gubernamental que, por lo general, está orientada a lesionar sus intereses.

Bibliografía

- Arizala, José. "Unión Patriótica", en Gustavo Gallón (compilador), *Entre movimientos y caudillos. 50 años de bipartidismo, izquierda y alternativas populares en Colombia*. Bogotá: Cinep-Cerec, 1989.
- Bourdieu, Pierre. *La distinción: criterio y bases sociales del gusto*. Madrid: Taurus, 1988.
- Berger, P. y Luckmann. *La construcción social de la realidad*. Buenos Aires: Amorrortu, 1995.
- Dalton, R., M. Kuecher y W. Bürklin. "El reto de los nuevos movimientos", en R. Dalton y M. Kuecher (compiladores), *Los nuevos movimientos sociales*. 1992
- Escobar, A. y S. Álvarez (eds.). *The Making of Social Movements in Latin America*. Boulder (Colorado): Westview Press, 1992.
- García Canclini, Néstor. "La sociología de la cultura de Pierre Bourdieu", en la introducción al libro de Bourdieu (1990) *Sociología y cultura*. México: Grijalbo, 1990.
- Gurr, Ted R. *Why Men Rebel*. Princenton: Princeton University Press, 1970.
- McCarthy J., D. McAdam y M. Zald. *Comparative Perspectives on Social Movements. Political Opportunities, Mobilizing Structures and Cultural Framings*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

- Melucci, Alberto. "Social Movements and the Democratization of Everyday Life", en John Keane (ed.), *Civil Society and the State*. New York: Verso, 1993.
- . "Individualización y globalización. Perspectivas teóricas", en *Estudios Sociológicos del Colegio de México*. Vol XIV, Nº 41, mayo-agosto de 1996.
- Múnera, Leopoldo. *Rupturas y continuidades. Poder y movimiento popular en Colombia 1968-1988*. Bogotá: Iepri-Cerec-Universidad Nacional de Colombia, 1998.
- Offe, Claus. *Partidos políticos y nuevos movimientos sociales*. Madrid: Sistema, 1990.
- Olson, Mancur. *The Logic of Collective Action*, New York: Schocken Books, 1968.
- Pécaut, Daniel. *Crónica de dos décadas de política colombiana 1968-1988*. Bogotá: Siglo XXI, 1989.
- Schmitt, Carl. *El concepto de lo "político". Teoría del partisano. Notas complementarias al concepto de lo "político"*. Madrid: Folios Ediciones, 1963.
- Schroers, Rolf. "La legítima ilegalidad. Sobre la situación del partisano", *Revista Eco*, Tomo V/1, Nº 25, mayo de 1962.
- Smelser, Neil. *Theory of Collective Behaviour*, New York: Free Press, 1963.
- Urrueta, Gloria. *Colonización y territorialidad*. San José del Guaviare: Utrecht-COA, 1990.

Renzo Ramírez Bacca

EL MOVIMIENTO CAFETERO CAMPESINO Y SU LUCHA CONTRA LOS EFECTOS DE LA APERTURA ECONÓMICA*

*En esta situación lo que nos toca será aguantar hambre más de cuatro
y robarnos unos a otros.*

ENTREVISTA (1993) A PARMENIO BUTRAGO, LA AURORA-LÍBANO.

En esta ponencia se hará un balance y un análisis de los efectos de la apertura económica en el sector agrícola cafetero, tomando en cuenta el caso del municipio de Líbano (Tolima)¹. El autor resalta el papel del movimiento de protesta campesino de carácter minifundista y su lucha en favor de la condonación de las deudas bancarias adquiridas por los caficultores en la última década, y también analiza el carácter organizacional del movimiento y la participación de los principales actores e instituciones (campesinos, guerrillas, Iglesia, FNCC y Estado) de la región.

*El presente trabajo toma en cuenta a uno de los aspectos que el autor desarrolla en su estudio sobre transformaciones sociolaborales en estructuras agrarias especializadas en la caficultura en la vereda La Aurora (Tolima-Colombia).

¹ Líbano fue considerado el Potosí agrícola colombiano, debido a la exitosa expansión de la caficultura tradicional –cafetales bajo sombra– en las primeras décadas del siglo xx. Después de haber sido uno de los epicentros de la guerra civil bipartidista durante La Violencia, pasó a ser un modelo de tecnificación cafetera en el país, con base en la variedad caturra. Y en la década de los noventa fue una de las regiones más azotadas por el proceso de globalización económica. Actualmente sigue siendo un municipio dependiente en un 90% de la producción cafetera, y no tiene ningún tipo de infraestructura para el procesamiento industrial del café, y considerado el quinto municipio nacional y el principal productor de café en el departamento del Tolima.

Para una comprensión global y desde una perspectiva histórica, el autor tiene en cuenta los efectos sociales y económicos del rompimiento del Convenio Internacional del Café, además de algunos aspectos que identifican esta problemática sectorial, como la superproducción cafetera, la expansión de la broca, la deuda económica y las políticas gubernamentales.

La factualidad del escrito es resultado de un estudio heurístico basado en diversas fuentes, y del contacto directo del autor en el campo con dirigentes, caficultores y trabajadores agrícolas que han vivido el impacto de lo que ellos llaman “la internacionalización del café” en la década de los noventa.

ROMPIMIENTO DEL CONVENIO INTERNACIONAL DEL CAFÉ Y SUS EFECTOS SOBRE LA CAFICULTURA COLOMBIANA

Los antecedentes de un movimiento social liderado por campesinos cafeteros son escasos². La Federación Nacional de Cafeteros, FNCC, tenía predominio ideológico sobre los cafeteros, de tal manera que los campesinos no habían actuado como grupo o fuerza social que determinara o pudiera influir en los mecanismos burocráticos y las políticas del gremio. El único centro focal de los distintos grupos había sido el interés económico que representaba el precio del café.

² Podemos recordar la importancia política de la lucha por la tierra que dieron jóvenes liberales y socialistas durante la fase de hegemonía conservadora en el país. Ésta se cristalizó en una protesta de los campesinos contra los cánones de arrendamiento y aparcería que prevalecían especialmente en las haciendas cafeteras. Hacia 1934 la gobernación de Cundinamarca y el Comité de Cafeteros de Cundinamarca oficializaron un reglamento interno para las haciendas cafeteras que fue adoptado en las zonas de conflicto. Véase Biblioteca Luis Ángel Arango, BLAA, Documento: Gobernación de Cundinamarca y Comité de Cafeteros de Cundinamarca, “Reglamento para las haciendas cafeteras. Elaborado por la comisión creada por la gobernación de Cundinamarca”, Bogotá, Editorial El Gráfico, 1934.

El 3 de julio de 1989 se produjo la ruptura del sistema de cuotas dentro del Convenio Internacional del Café, seguido de un desplome de las cotizaciones internacionales del grano en casi 60%. Con el rompimiento del Pacto, el sector cafetero fue el primero en recibir el impacto de la economía de mercado y en sufrir profundas transformaciones que afectaron el empleo, la inversión y el ahorro en más de 500 municipios de 16 departamentos.

El sector cafetero, uno de los más apoyados y protegidos por el Estado, comenzó a vivir una revolución silenciosa. Hasta ese momento el Estado había centrado su atención en problemas de financiamiento, de investigación tecnológica y de relaciones laborales, entre otros³. El crecimiento del crédito de los bancos privados hacia el sector había contado con el respaldo de la política monetaria del gobierno, por medio de tasas de interés reducidas y, en algunos casos, por debajo del costo real del dinero⁴.

Esta tendencia cambia durante la administración del presidente César Gaviria (1990-1994), con la llamada “apertura económica” y el “Plan de Desarrollo Social y Económico”, con lo que se pretendió transferir los ingresos del sector agropecuario hacia el resto de la economía, tal y como se había hecho en otros países de América Latina. Esto redujo la participación en el PIB, de tal manera que creció lentamente la producción y sus exportaciones, afectando el nivel de ingreso de los productores rurales e introduciendo distorsiones en dicho nivel. Es importante señalar también que esta administración inicialmente también actuó apoyando a la FNCC en la realización de políticas más agresivas de comercialización, al tiempo que pronosticó serios ajustes en el Fondo Nacional del Café.

Los primeros meses posteriores al rompimiento del Pacto Cafetero son de pleno optimismo. Colombia había sido el que

³ Vallejo *et al.*, 1977, p. 95.

⁴ *Ibid.*, 1977, p. 97.

mejor había soportado la crisis y, también, mejorado los precios internos del grano⁵. La influencia y liderazgo de la FNCC se había fortalecido en función de proteger a los países productores. Colombia había aumentado los rendimientos por encima de otros países como Brasil, México, Indonesia y Costa de Marfil. Los países productores seguían desarrollando ciertas estrategias a través de la Organización Internacional del Café, OIC, en donde se discutían políticas que permitieran regular el mercado y los precios⁶.

Entre tanto, el sector cafetero, en función de la competencia internacional, redujo los costos de la producción a través de ajustes en una política de precios internos, afrontando las deprimidas cotizaciones del mercado mundial. Esta coyuntura, y las acciones de comercialización, parecieron favorecer el papel de los exportadores privados, aunque para el sector empresarial mixto la decadencia era evidente. El fenómeno se refleja en una disminución del consumo y comercio local de las zonas cafeteras y en una reducción de 25% del ingreso anual del caficultor colombiano en el año posterior al rompimiento del pacto⁷.

Estos impactos adversos ocasionados por las políticas macroeconómicas no alcanzaron a ser compensados con políticas sectoriales agropecuarias, por lo que la crisis del sector industrial y agropecuario se hizo endémica. Esta situación se refleja en la presencia de siete millones de colombianos en condiciones de

⁵ Esto es resultado del desmonte de un subsidio que existía para el consumo interno del grano. *El Espectador*, 10 de enero de 1990.

⁶ El desdén por falta de acuerdos entre los dos más grandes productores de café se basaba en el optimismo que se manejaba por parte de los empresarios colombianos en torno a la preparación colombiana para participar con agilidad y flexibilidad en el comercio internacional. Incluso Colombia habló de desmontar definitivamente esta organización, debido a su costo e inoperancia, pérdida de credibilidad y porque no presentaba iniciativas para volver a un acuerdo con los consumidores.

⁷ Este cálculo es una comparación con 1988.

extrema miseria, de los cuales 74% habitarían en las zonas rurales⁸.

Los cafeteros empezaron a debatirse entre el pesimismo y la esperanza. Algunos consideraban imposible mantener el índice de oferta en el mercado. Otros, su antípoda, veían lo contrario. No obstante, 1990 fue...

EL AÑO DE LA SUPERPRODUCCIÓN

En 1990 la política del gremio cafetero era aumentar la producción hacia el mercado internacional; su reducción significaba una disminución de los ingresos para los exportadores. Se anuncia también una de las más grandes cosechas en la historia de la caficultura colombiana y se espera recoger 18 millones de arrobas⁹. La producción, en efecto, aumentó 25,3%¹⁰.

En las zonas del Eje Cafetero la gente parece no darse cuenta de que sus ciudades capitales, poseedoras de un alto ingreso *per cápita*, empiezan a ser desplazadas en su calidad de vida¹¹. El alto costo de la canasta familiar, a pesar de la liquidez existente por las ventas de café, influyó en el deterioro de su nivel de vida. La pérdida de capacidad de compra se expresó en una disminución de ventas en el comercio. En lo único que no disminuyó la demanda fue en el consumo de bebidas alcohólicas, ya que a

⁸ En la actualidad esta cifra llega a 79,7% del 55% nacional. Fuentes: Fedesarrollo, en *El Tiempo*, 7 de mayo del 2000. Véase también Documento de Trabajo "Jornada Cafetera Libanense", Organizador: Unidad Cafetera de Libano, Coordinación general: monseñor José Luis Serna Alzate, julio 13 y 14 de 1996, Libano, Tolima.

⁹ En marzo se alcanzó la cifra récord de 1'350.000 sacos. *El Espectador*, 6 de abril de 1990.

¹⁰ *El Espectador*, 12 de febrero de 1990.

¹¹ Pereira fue considerada como la ciudad con el mejor ingreso *per cápita* del país antes de 1989, año a partir del cual empieza a ser desplazada en su calidad de vida.

la zona cafetera llegaban más de 50 mil cosecheros provenientes de diversas ciudades, que disparaban la demanda¹².

Los pequeños y medianos productores son las principales víctimas de los cambios ocasionados por la caída del precio internacional, del alza en los precios internos que no compensan el ritmo inflacionario, de los costos financieros y de producción, y de la espiral alcista¹³.

En este contexto, la realidad es que mientras las exportaciones crecieron 33%, los ingresos de estos caficultores habían disminuido en 14,8%¹⁴. A juicio de expertos internacionales, Colombia fue el país más afectado por la ruptura del Convenio Internacional del Café. La consecuencia inmediata es que se desatiende una serie de gastos y programas de estudio económico, de financiación, salud, educación, tecnología y créditos.

La respuesta por parte de la administración Gaviria es abandonar el carácter compensatorio y de subsidios, con el propósito de estimular al pequeño productor y permitir una mayor libertad del comercio. En materia de crédito, las tasas de interés subsidiadas, según la administración, deben desaparecer, a cambio de una mayor disponibilidad de recursos. El sector privado, propone el Gobierno, debe dejar el oficio de reclamar compensaciones, para asumir una posición más técnica de promover la productividad y fiscalizar a los entes estatales¹⁵.

¹² El cosechero es un trabajador ambulante que se desplaza especialmente entre los departamentos de Caldas, Tolima, Cundinamarca, Putumayo o Norte de Santander.

¹³ En esto deben incluirse los costos de fertilizantes y créditos, que empezaron a aumentar de manera desproporcionada. Los insumos sufren alzas periódicas, como consecuencia de que los abonos agrícolas habían quedado en libertad de precios desde 1989, cuando se acordó que serían incrementados trimestralmente, de acuerdo con las variaciones de los costos de la producción. *El Espectador*, 6 de abril de 1990.

¹⁴ *El Tiempo*, 27 de octubre de 1990.

¹⁵ *El Espectador*, 21 de junio de 1990.

Además, la FNCC, para contrarrestar los bajos precios y los altos niveles del inventario, reactivó un plan puesto en marcha años atrás¹⁶. El plan Programa de Desarrollo y Diversificación de Zonas Cafeteras tendría como objeto convertir al caficultor en un empresario que planifique, tenga un sistema de organización laboral y maneje su presupuesto. El proyecto pretende disminuir las pérdidas postcosechas, que llegan a 50% de la producción¹⁷.

El impacto neoliberal se refleja también en la disminución del patrimonio del Fondo Nacional del Café, FNC, el cual era de 1.700 millones de dólares en julio de 1989 y disminuye a 1.300 millones en abril de 1990¹⁸. Es el comienzo real de la transición a las “nuevas condiciones”, por lo que los funcionarios cafeteros anunciaron que había llegado el momento de sentir los efectos del rompimiento del Pacto Cafetero. La primera medida es reajustar en 6% el valor del grano y aumentar los costos de la producción de acuerdo con la inflación en 1991.

Gobierno y Federación se recriminan mutuamente; esta última considera que las políticas gubernamentales, establecidas en abril del mismo año, habían sacado del “pacto social” a los caficultores. Los cafeteros sostienen que el último reajuste había generado una pérdida real en sus ingresos. El Gobierno, en cabeza del ministro de Hacienda, Rudolf Hommes, sostiene que los anteriores acuerdos se habían hecho en condiciones de mercado totalmente distintas¹⁹. Las nuevas condiciones tenían un

¹⁶ Años antes del rompimiento del pacto cafetero, el país vivía el fenómeno de la sobreproducción cafetera, para lo que se quiso utilizar como políticas los bajos precios del mercado interno y la erradicación de cultivos, como herramientas para desincentivar la producción. Según Ocampo, ninguna de estas dos políticas eran convincentes para frenar la producción. Véase Ocampo, 1987, p. 35.

¹⁷ *El Espectador*, 21 de octubre de 1990.

¹⁸ *El Espectador*, 18 de mayo de 1990.

¹⁹ El ingreso promedio del productor en el país era en julio de 70,34 centavos de dólar por libra, frente a 57 y 57 centavos en Brasil, El Salvador y México. Arguyó,

costo enorme para el Estado, pues ante la superproducción y una tarifa alta del precio interno, el déficit era cada vez más grande. Hasta ese momento se creía que el déficit ascendería a 135.000 millones de pesos²⁰. El Fondo empieza a hacer balances, contando en recursos unos siete millones de sacos de café, y con las inversiones del Fondo (Bancafé, Empresa Mercante Gran Colombiana, Concasa, entre otros).

LA BROCA

Al precio del grano y la incertidumbre de la revolución capitalista neoliberal se le sumó el problema de la broca²¹. Éste fue otro de los factores que influyó en la descomposición social de los caficultores. Si bien la reacción inicial en torno a su control fue un optimismo moderado, con el tiempo, los ataques agresivos e incontrolados de la broca, y la timidez de la FNCC para afrontar este problema, contribuyeron radicalmente al deterioro de la rentabilidad del cultivo. El hecho es que de 25.000 hectáreas de cultivos afectadas en 1990, se pasó a cerca de 600.000 en 1996, de un total de 1,2 millones de hectáreas dedicadas al cultivo (véase *Evolución de la broca a nivel nacional*, 1988-1996).

La broca obligó a la FNCC a trazar un plan de erradicación de cultivos, por lo que muchos desistieron de seguir invirtiendo en la caficultura²². La gente ya no podía recoger el café y empe-

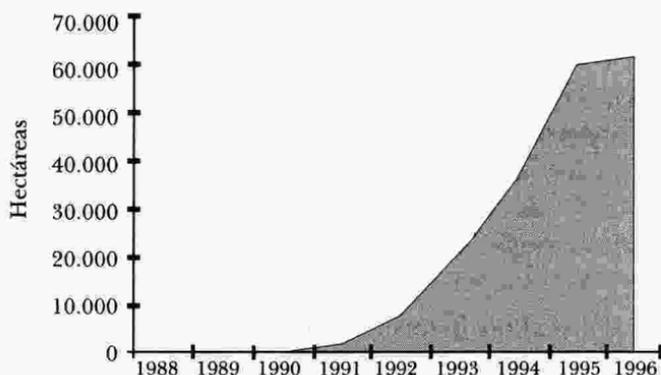
además, que un reajuste del 11% era exagerado, teniendo en cuenta que Colombia tiene el precio al productor más alto del mundo. *El Tiempo*, 10 de julio de 1991; 10 de agosto de 1991.

²⁰ *El Tiempo*, 10 de agosto de 1991.

²¹ El 7 de septiembre de 1988 había sido detectada la broca en el Ecuador y poco después fue detectada en Colombia.

²² A mediados de los noventa se ofrecía un millón de pesos a cambio de erradicar cada hectárea de café broquicado. Este tratamiento fue especial para los grandes

Evolución de la broca a nivel nacional, 1988-1996



Fuente: Fedecafé, *El Espectador*, 3 de mayo de 1996.

zó a abandonar sus fincas. Los caficultores que habían invertido en insumos agroquímicos perdieron. El pesimismo se apoderó de todos. El café dejó de ser un negocio lucrativo para cientos de familias cafeteras.

LA DEUDA CAFETERA

Con la recesión económica cafetera, los productores aceleran su endeudamiento con el sector financiero. La deuda es causada por el alto costo de los intereses bancarios y crea una disminución alarmante de la producción. Es importante señalar que esta tendencia se inició con la revolución tecnológica del caturra, la que influyó en un proceso lento de endeudamiento, con el afán de invertir recursos y lograr un buen margen de rentabilidad.

y medianos caficultores, los cuales recibieron subsidios por broca y renovación, debido a las grandes áreas establecidas. Los pequeños propietarios poseedores de parcelas de hasta cuatro o cinco hectáreas no siempre fueron protegidos por esta política.

Entonces, se contaba con un precio interno estable y crédito con tasas de interés manejables²³.

La inversión desmedida acumuló un pasivo que se quiso subsanar con la producción o la esperanza de mejores precios, a lo que se sumó el freno de flujo de crédito para la actividad cafetera, especialmente entre 1991-1993, y la iliquidez del cafetero obligó al endeudamiento extrabancario, reemplazando la tradicional fuente de la Caja Agraria o Banco Cafetero, para no dejar perder la inversión realizada en los predios, acelerando aún más el endeudamiento.

Los intereses por mora rebasaron los límites de la usura, ya que por ley estaban en 3% mensual, según el reglamento del Fondo Rotatorio de Crédito Cafetero, pero crecieron hasta 5,4%, lo que significó 65% anual, sin incluir los costos de abogado, que permitían subirlos hasta 72,5%, en caso de cobro judicial.

Medianos y pequeños cultivadores fueron obligados a vender sus fincas a cualquier precio, para pagar sus deudas. Otros, simplemente, fueron sacados del negocio, porque las entidades financieras les embargaron sus fincas. En muchos casos, las ventas se hicieron a precio de ganga. Fincas cafeteras, que en 1992 valían entre 10 y 12 millones de pesos, se vendieron a 6 y 7 millones, es decir, 40% menos²⁴.

La situación llegó a tal extremo, que en 1993, y debido a la presión de los cafeteros y otros sectores de la sociedad de los cuales trataremos más adelante, se firmó la Ley 34 del 5 de enero de 1993. Con ella se habló por primera vez de la refinanciación de deudas. La insolvencia del Cafetero y el no pago de sus acreencias estimuló el desespero de las entidades financieras que, te-

²³ Esta inclinación aumentó hacia los años ochenta, auspiciada por la bonanza cafetera de 1975.

²⁴ En Risaralda se llegó a vender la hectárea a un millón de pesos, cuando su valor había sido de cuatro millones.

merasas por la posible pérdida de la deuda, presionaron a los usuarios con los famosos “arreglos de cartera” (Ley 34, Plan de Choque), haciendo refinanciaciones, recogiendo los intereses y capitalizándolos conjuntamente en nuevos pagarés, multiplicando así el monto de la deuda y, por consiguiente, de la cartera, mostrando a su oficina principal una disminución de cartera vencida, pero a costa de lo inalcanzable que se hacía el pago de las nuevas obligaciones²⁵.

Por esta razón, en el norte del Tolima, al igual que en las otras regiones cafeteras, el punto central de la crisis del pequeño y mediano caficultor fue la deuda con las instituciones bancarias. El problema consistió en que las deudas adquiridas en 1991 se habían triplicado en su monto nominal en 1996. Este problema era potencialmente un foco de conflicto social, ya que se calculaba que en el país había alrededor de 350.000 familias endeudadas.

Tan sólo contando las fuentes de la Caja Agraria, en Líbano fueron contabilizadas 743 obligaciones vencidas, de las cuales 68% pertenecían a clientes que tenían deudas menores de 5 millones de pesos. En este mismo año, 1996, fueron contabilizados 317 casos que estaban en curso en el Juzgado Civil del Circuito de Líbano, de los cuales 160 habían sido diligenciados por el Banco Cafetero.

Posterior a la Ley 34, se estimuló la Ley 101 de 1993, que es una ley tributaria. En dicha ley existen unos artículos que tratan sobre la condonación de deuda por primera vez en la historia moderna del país. Esta ley abrió la condonación hasta por tres millones de pesos. Con una nueva norma adicional a la Ley 223 de 1991, durante la administración del presidente Ernesto Samper (1994-1998), se aprobó una condonación de cinco mi-

²⁵ Documento de trabajo, “Jornada Cafetera Libanense”, Organizador: Unidad Cafetera de El Líbano, Coordinación general: monseñor José Luis Serna Álzate, julio 13 y 14 de 1996, Líbano, Tolima.

Obligaciones vencidas de caficultores con la Caja Agraria en Líbano (1996)

Deudas en millones de pesos	Número de obligaciones vencidas	Porcentaje
Menos de 5	502	67,56
De 5 a 10	119	16,00
De 10 a 15	46	3,19
De 15 a 20	22	2,96
Más de 20	54	7,26
Total	743	100,00

Nota: En esta estadística no están incluidos datos para el corregimiento de Santa Teresa y tampoco las deudas adquiridas en el Banco Cafetero. Fuente: Archivo Caja Agraria, municipio del Líbano²⁶.

lones de pesos, hecho sin precedentes en la historia del país. Ésta abarcó 28% del total los deudores nacionales, quedando el restante sin solución.

La aprobación de estas leyes no se logró sin una fuerte presión del movimiento cafetero interregional y la participación de instituciones y grupos de poder. Y si bien en términos generales la lucha se dio en forma pacífica, no fueron excepción, para el caso de los cafeteros, situaciones de fuerte politización y militarización del conflicto, y de la instrumentación o desborde de la represión, en algunos casos.

FORMACIÓN DEL MOVIMIENTO CAFETERO INTERREGIONAL: EL PROCESO Y SUS ACTORES, 1992-1995

La Federación confiaba que 1992 fuera el último año de la crisis; sus políticas se habían concentrado tan sólo a combatir la

²⁶ Esta información estadística ha sido suministrada por Rafael Orellano, Presidente ANUC, Líbano.

broca²⁷. Pero a comienzos del mismo, el sector fue sometido a uno de los más duros ajustes que se recuerde, a fin de reducir el déficit del gremio, seguido de un desplome del precio del grano en el mercado internacional, el cual fue cotizado en 57 centavos de dólar la libra²⁸. Ante estas circunstancias, la Federación se ve obligada a usar el crédito externo, ante la carencia de recursos, con el aval del Estado²⁹.

El Congreso de la República y sus legisladores comienzan a intervenir en la crisis, cuestionan duramente al Gobierno y a la Federación, señalados culpables del costo político y social de la crisis; empiezan a promover un paro nacional en el sector y plantean por primera vez la necesidad de una política de refinanciación³⁰. El Gobierno advierte sobre la inconstitucionalidad de este proyecto³¹.

²⁷ Inicialmente se intentó erradicar la broca con ayuda de la avispa de Mongolia, y se intentó no llegar al uso de fertilizantes, lo que en efecto se produce años después.

²⁸ El desplome se debió, primero, a que Costa de Marfil se había dedicado a vender grandes cantidades de grano, lo que empujó hacia abajo las cotizaciones. Y segundo, porque el mercado internacional no creyó en un nuevo pacto de países productores y siguió trabajando bajo las condiciones de una alta oferta y demanda. *El Tiempo*, 5 de mayo de 1992.

²⁹ En menos de un año el Fondo ya había prestado 300 millones de dólares; además, el Fondo tendría que conseguir 650 millones en los próximos tres años. Hommes prometía que al resolver el problema del déficit cafetero por esta vía, no se afectaría la demanda general de las 300 mil familias cafeteras. *El Tiempo*, 2 de noviembre de 1992.

³⁰ La propuesta de refinanciación ya había sido hecha a la Federación por los cafeteros del Tolima y el Valle del Cauca, los departamentos con los niveles más críticos de endeudamiento, por lo que el gremio propuso, en cambio, el plan del Banco Cafetero, que fue imposible de cumplir. La propuesta de refinanciar la deuda se basaba especialmente en ofrecer tranquilidad, evitar mayores costos por honorarios de abogados, secuestres y, en algunos casos, pérdida de la propiedad, con la consecuente emigración a la ciudad para sumar más desempleados y engrosar los cinturones de miseria de las cabeceras municipales. *El Tiempo*, 19 de febrero de 1992; *El Tiempo*, 21 de febrero de 1992.

³¹ *El Tiempo*, 29 de octubre de 1992.

Lo cierto es que los caficultores comenzaron a incumplir en el pago de sus deudas, originando una reacción social de gran dimensión. En el transcurso del año fueron organizadas dos marchas en la zona del Eje Cafetero, convocadas por la Unidad Cafetera de Colombia, UCC, y un paro convocado por agricultores y recolectores del municipio de Salgar, al sudoeste antioqueño³².

³² La primera marcha fue organizada el 14 de junio de 1992. En ella participaron 11 departamentos y más de 220 municipios. Fue convocada por la Unidad Cafetera de Colombia, UCC, con capacidad para movilizar 50 mil caficultores. El propósito es protestar contra el bajo precio interno del grano y la política cafetera del Gobierno, bajo la consigna "resistencia cafetera". Los productores piden el aumento del precio del grano, la eliminación del impuesto de 3% de retención en la fuente a las ventas del grano, del certificado de cambio para las exportaciones y del Título de Ahorro Cafetero, y el cese inmediato de todos los procesos judiciales que se realizan contra los caficultores que no han podido cumplir con sus pagos. *El Tiempo*, 11 de junio de 1992.

En la segunda marcha, realizada el 11 de agosto, caficultores de todos los estratos firmaron un documento con seis peticiones al presidente Gaviria, y lo entregaron como una "Proclama Cafetera". La agenda propone cambiar a Hommes como ministro de Hacienda, al director de Planeación Nacional, Armando Montenegro, y al presidente del Banco Cafetero, Luis Prieto Ocampo, a quienes tildan de "injustos con los intereses de los caficultores". En resumen, con la movilización, la marcha pretende expresar la inconformidad del gremio por el abandono y la falta de una verdadera atención por parte del Gobierno para con los cafeteros. *El Tiempo*, 11 de agosto de 1992.

En el paro de trabajadores del sector, en el que participaron cerca de 150 agricultores y recolectores de café del municipio de Salgar, al sudoeste antioqueño, los cosecheros, durante ochenta días, exigieron un salario fijo mensual y las garantías que brinda el Estado a los trabajadores. El movimiento se declaró independiente de las acciones de la guerrilla –frentes XXXIV de las FARC y Ernesto "Che" Guevara, del ELN– en la zona, aunque la policía señala que el paro había sido promovido por la guerrilla. Según fuentes periodísticas, se calculaba que de 26.914 caficultores del sudoeste, por lo menos 80% era asediado por la guerrilla. Estos frentes exigen material logístico (radios, *sleepings*, etc.) y un impuesto de guerra que deben pagar semestralmente, según la capacidad individual del caficultor, con el propósito de ofrecer seguridad en la zona. *El Tiempo*, 24 de octubre de 1992.

En 1993 se aprueba la Ley 34 sobre refinanciación, que en medio de esperanzas no cumple con las expectativas de los caficultores³³. La movilización social cafetera continúa, y el 30 de marzo de 1993 se da una protesta masiva de unos 2.000 cafeteros en la Plaza de Bolívar de Bogotá³⁴. La posición del Gobierno era que Colombia y su principal sector socio-productivo tradicional estaban preparados para seguir en el mercado libre.

Ante la crisis cafetera, la posición de la Iglesia católica es unánime. Los obispos colombianos, en cabeza de monseñor Pedro Rubiano, presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, y monseñor Jorge Enrique Jiménez, obispo de Zipaquirá, piden al Gobierno condonar la deuda de los pequeños caficultores y eliminar el Título de Ahorro Cafetero, TAC, un papel que se les entrega, en lugar de dinero en efectivo, a los cultivadores en parte de pago por su cosecha³⁵. La alta jerarquía católica invita a la comunidad campesina cafetera a reclamar sus derechos y presentar sus legítimas exigencias. Y al resto de los colombianos pide soli-

³³ *El Tiempo*, 12 de enero de 1993; *El Tiempo*, 2 de mayo de 1993.

³⁴ Unos dos mil caficultores provenientes de distintas zonas cafeteras del país, en unos 200 camperos Willis, jeeps y chivas o buses escalera protestaron contra las políticas del Comité Nacional de Cafeteros. Los manifestantes reunidos en la plaza lanzaron consignas en contra del ministro de Hacienda, Rudolf Hommes, y del presidente César Gaviria, considerados sus verdugos. Los cafeteros acudieron a símbolos como, por ejemplo, cargar un ataúd para simular el entierro de la caficultura colombiana. También exhibieron máscaras del ministro Hommes, a tiempo que movilizaron pancartas en contra del Gobierno. La plenaria de la Cámara de Representantes recibió una comisión de los manifestantes que expuso sus inquietudes y algunos parlamentarios se comprometieron a continuar buscando una solución para el gremio. La mayoría regresó esa misma noche a sus lugares de trabajo. *El Tiempo*, 31 de marzo de 1993.

³⁵ La Iglesia, además de estos dos puntos, pide la reducción de los plazos establecidos para la conversión del certificado de cambio, el establecimiento de una transferencia de recursos del Fondo de Regalías al Fondo Nacional del Café, la prórroga de los términos fijados en la Ley 34 de 1993 sobre refinanciación de los créditos

daridad con los afectados³⁶. En este sentido, y desde una perspectiva nacional, esta posición de la Iglesia tampoco había tenido precedentes en el país.

Así, el criterio en torno a la condonación de la deuda es cada día más unánime, especialmente entre las asociaciones que luchan por los intereses de los caficultores y entre los miembros del clero católico. La refinanciación para los dirigentes del sector rural significaba alargar la agonía de los cafeteros. Las organizaciones gremiales defensoras del sector también empiezan a mirar con buenas expectativas la condonación de la deuda. El hecho no es para menos: el ingreso real de los cafeteros había disminuido en 60%³⁷.

1995: EL AÑO DEFINITIVO DEL MOVIMIENTO CAFETERO

Hacia 1995 el norte del Tolima es una de la zonas más afectadas del país ante el impacto de la economía de mercado³⁸. La situación es de desempleo, hambre y, en general, falta de recursos. La inseguridad se toma el norte del departamento. Los robos en las fincas, atracos, suicidios, intentos de secuestro, boleteo y extorsiones pasaron al orden del día. Unos 5.000 campesinos

agropecuarios, la reducción de los gastos de administración del Fondo Nacional del Café, y otras más. *El Tiempo*, 11 de marzo de 1993.

³⁶ Los obispos eran conscientes del acelerado empobrecimiento de los cafeteros, sus estados de hambre, abandono y pérdida de fincas por la imposibilidad de pagar las deudas adquiridas; de la intranquilidad en estas regiones tradicionalmente pacíficas, el incremento de la violencia común, los homicidios y los robos, y de la presencia guerrillera, cuyas filas empezaban a verse engrosadas, con alta frecuencia, por jóvenes que desertaban de las actividades agrarias. *El Tiempo*, 11 de marzo de 1993.

³⁷ *El Tiempo*, 25 de abril de 1994.

³⁸ En este año quedaron también desempleados 100.000 trabajadores del sector algodonero y arrocerero tolimense.

de la subregión, que habían adquirido sus parcelas con años de trabajo y duros sacrificios, deciden abandonar sus fincas³⁹.

A lo anterior se sumó la incursión de la guerrilla en 1992, con la aparición del autodenominado frente de los Bolcheviques, célula del ELN que tomó el nombre de la primera protesta popular de índole social que tuvo lugar en Líbano en 1929. En el primer comunicado de los “bolchevos” dejaron claro que su intención era impedir los embargos y remates de las fincas por parte de la Caja Agraria y el Banco Cafetero⁴⁰.

A nivel nacional, el entrante gobierno de Ernesto Samper declaraba que no hay más recursos para ofrecer a los cafeteros, contradiciendo lo prometido durante su campaña presidencial⁴¹. Los primeros en reaccionar fueron los cafeteros libanenses, ahora agremiados en torno a la Asociación de Pequeños y Medianos Agricultores del Tolima, ASOPEMA⁴². Éstos deciden declarar un

³⁹ En Líbano se manejaban estadísticas muy diferentes de las que hasta ese momento tenía el Gobierno. El destino de muchos caficultores había sido la marginalización social y económica en los principales centros industriales del país o el éxodo a los Llanos Orientales, en la recolección de la hoja de coca, lo que influye en una disminución de 25% en el índice poblacional urbano y rural, tomando como referencia el censo poblacional de 1993.

⁴⁰ El control social en la zona rural se inició simbólicamente dinamitando el puesto de policía del corregimiento de Santa Teresa, sin que se hubieran registrado víctimas. Posteriormente inicia su acción contra los rasgos de vandalismo y robos, al tiempo que impone ciertas normas sociales de comportamiento en la población, que atacaban especialmente la violencia intrafamiliar, la vagancia y el alcoholismo.

⁴¹ El 28 de abril de 1994, el candidato Ernesto Samper le dijo a los cafeteros de Calarcá: “Yo voy a devolverles la presencia del presupuesto nacional a las zonas cafeteras. Durante muchos años los cafeteros le dieron la mano, presupuestalmente hablando, al país. Ahora el país va a tener que darles la mano presupuestalmente a los cafeteros. Que regresen los recursos del gobierno nacional a las zonas cafeteras”. *El Tiempo*, 17 de julio de 1995.

⁴² La organización tiene sus antecedentes desde 1992 con el Gremio Cafetero Unido de Colombia, que duró un tiempo politizado. En ASOPEMA convergieron diversas fuerzas y sectores políticos que se unieron coyunturalmente, a fin de presionar al

paro cafetero para el 18 de febrero de 1995, en el que se oponen abiertamente a la política de refinanciación de sus deudas y buscan fundamentalmente que las tierras embargadas de los campesinos no sean rematadas. El paro se extendió a 23 días, logrando sus organizadores que el Gobierno, la Federación y la Caja Agraria llegaran a los siguientes acuerdos⁴³.

- Refinanciamiento de la deuda, con un plazo de 10 años para su pago y un periodo de gracia de tres años. La Federación también se compromete a condonar automáticamente el 30% de la deuda para los caficultores que se encuentren en los niveles de los fondos rotatorios y cuya deuda ascienda hasta los tres millones y medio de pesos⁴⁴.

- El Ministerio de Agricultura se compromete a otorgar recursos por medio del programa de generación de empleo, para enfrentar el problema de la broca.

- La Caja Agraria examinará uno a uno los casos de cobros judiciales en el norte del Tolima, para buscarle salidas viables a estos procesos.

- Los agentes del gobierno también se comprometieron a continuar con el análisis de otras propuestas, como la celebración de un convenio entre la Caja Agraria y el Incora para ad-

gobierno nacional y lograr la condonación de la deuda. El éxito más grande fue la realización de un paro cafetero en dos oportunidades durante 1995. Uno duró 23 días y otro 63 días, con epicentro en Líbano. Los principales dirigentes han sido víctimas de amenazas; se recuerda especialmente al dirigente cívico Gonzalo Poveda, quien fue asesinado por un grupo de sicarios el 14 de agosto de 1995.

⁴³ La propuesta del gobierno es la de refinanciar la deuda a diez años de 139 mil millones de pesos de la deuda total, 220 mil millones, a través del Banco Cafetero. La posición de los caficultores es que ellos no están en capacidad de pagar esa deuda, ante el grave deterioro que vive la caficultura y ante la imposibilidad de obtener nuevos créditos para reactivar el sector. La Federación se opone a utilizar los recursos del Fondo Nacional.

⁴⁴ Es importante señalar que estos acuerdos ya se habían hecho nacionalmente.

quirir las fincas en conflicto y renegociarlas con sus dueños originales. Y también, a estudiar las propuestas entregadas por los directivos de la Unidad Cafetera Nacional al presidente Samper⁴⁵.

En el nivel nacional, dirigentes cooperativistas consideraron como una farsa la solución de condonar parcialmente la deuda⁴⁶. Los cafeteros fortalecieron entonces la idea de una nueva Marcha en el Eje Cafetero para el 29 de marzo. La convocatoria a esta movilización tuvo diferentes criterios. De una parte, los obispos de la región apoyaban a los productores de nueve departamentos cafeteros y al presidente de la Unidad Cafetera, Fabio Trujillo Agudelo, encargado de la convocatoria; y de otra, el Comité Nacional de Cafeteros defendía la tarea de la Federación para aliviar la crisis y se oponía al movimiento, que según ellos estaba dirigido por elementos extraños ajenos a los intereses de los productores⁴⁷. El respaldo de la Iglesia fue definitivo para que en esta marcha hubieran participado caficultores de ocho departamentos⁴⁸. La marcha se realizó con éxito, sin que se hubieran presentado problemas que lamentar, pero sin haberse logrado definir una postura consecuente por parte del Gobierno nacional.

Los cafeteros le seguían recordando al Presidente que la revaluación del peso les hizo perder cerca de 1.000 millones de dólares y que no estaban dispuestos a dejar que la situación si-

⁴⁵ *Tolima 7 Días*, 1º de marzo de 1995.

⁴⁶ *El Tiempo*, 29 de marzo de 1995.

⁴⁷ *El Tiempo*, 29 de marzo de 1995.

⁴⁸ La inquietud de los dirigentes huelguistas era similar a las anteriores, se relacionaba con la deuda de los caficultores, que entonces ya había ascendido a 280 mil millones de pesos, y el reajuste del precio interno, que en ese momento se hacía conforme a las fluctuaciones en el mercado internacional. *El Tiempo*, 29 de marzo de 1995.

guiera deteriorándose⁴⁹. La postura del gobierno de no seguir aliviando la crisis del sector ante la carencia de presupuesto motiva a que distintas autoridades ofrecieran nuevamente su apoyo a la iniciativa del Primer Paro Nacional de Cafeteros⁵⁰.

A pesar de haberse celebrado algunas reuniones entre el Gobierno y representantes del gremio cafetero, no se lograron acuerdos en los mecanismos de ayuda, de tal manera que el 2 de junio, en Manizales, se dio la orden de Paro Cafetero Nacional, por 24 horas, para el 20 de julio. Jorge Enrique Robledo Castillo, coordinador de la protesta, contaba con el respaldo y la solidaridad del presidente del Senado de la República, Juan Guillermo Ángel, y de los obispos de la región cafetera (Manizales, Pereira, Armenia, Dorada, Líbano-Honda)⁵¹.

Días antes a su realización, el movimiento estaba dividido. Voceros del Gobierno cuestionaban la legalidad y el alcance del paro ante los rumores de filtración de la guerrilla⁵². Los Comi-

⁴⁹ *El Tiempo*, 28 de abril de 1995.

⁵⁰ Los cafeteros, en una nueva dimensión nacional de su reivindicación, agregaron la ayuda inmediata “constante y sonante” para evitar la expansión de la broca. *El Tiempo*, 30 de abril de 1995.

⁵¹ El paro cafetero, lanzado por la UCC, fue acordado tras conocerse un documento de la Asociación de Pequeños y Medianos Agricultores del Tolima, ASOPEMA, según el cual entre los pequeños y medianos caficultores en los últimos cinco años se ha producido un desplazamiento de 80.000 caficultores, que han abandonado sus predios por procesos judiciales, baja rentabilidad, amenazas de muerte, hostigamientos militares y broca. *El Tiempo*, 6 de junio de 1995.

⁵² El gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, denunció un plan del ELN para filtrar las organizaciones cafeteras y desde allí promover el paro nacional. Se “trata de construir una organización política en aras de levantar un movimiento de masas”, como primordial elemento de la creación de “colectivos urbanos y rurales”, más conocidos como Milicias Populares. Se afirmó que los 30 grupos de milicias eran un apoyo armado a la actividad política, principal herramienta de trabajo de estos grupos, y cuyo comité serviría como eje y tendría como estrategia la acumulación en el área rural con la intención de preparar el terreno para la defensa de la propuesta política”. Los com

tés Municipales de Cafeteros de algunos departamentos también se opusieron abiertamente, por considerar que no era el método adecuado para el logro de los objetivos. El jerarca de la Iglesia, monseñor Pedro Rubiano, también se opuso⁵³, al tiempo que los dirigentes campesinos y cafeteros hacían declaraciones en el sentido de que la guerrilla no estaba organizando el paro, y que eran los cafeteros los que estaban al frente de su propia lucha⁵⁴.

Para varios analistas, la protesta resultaba ser un ingrediente necesario para originar una reacción en cadena. La coyuntura mostraba, por un lado, el desespero y la crítica situación de los dirigentes gremiales que pretenden salvarla. Por otro, el acoso de la guerrilla, que estaba presionando al Gobierno en el proceso de paz. Y, finalmente, el pronunciamiento de Samper, que había calentado el sorbo nacionalista⁵⁵.

Ante el decidido movimiento cafetero y la movilización campesina, el Gobierno nacional hizo duras advertencias: anunció que no iba a permitir el bloqueo de las vías y que el Eje Cafetero sería militarizado⁵⁶. Finalmente, con la jornada de protesta se

ponentes de trabajo, según el gobernador, consistían en influir los sectores cívicos y estudiantiles y el sector obrero. Para sacar adelante el proyecto, se dice que en este año se realizaron cursillos de líderes guerrilleros especializados en organizaciones cafeteras y se incrementaron las acciones en los comités de cafeteros para difundir estas ideologías. De la misma manera, los frentes del ELN habían recibido la orden de “fortalecer el movimiento obrero” en organizaciones sociales de las organizaciones obreras del café, con la formación de medios, combatientes y premilitantes urbanos. De esta manera, algunos oficiales creen que el paro ha sido infiltrado por la guerrilla o por lo menos iba a ser aprovechado por ésta. *El Tiempo*, 19 de julio de 1995.

⁵³ *El Tiempo*, 7 de julio de 1995.

⁵⁴ *El Tiempo*, 6 de julio de 1995.

⁵⁵ De hecho, la preocupación existente en las altas esferas del Gobierno es que el Paro pensaba ser utilizado con propósitos políticos y podía tener efectos muy negativos. Peor aún, la crisis cafetera podría canalizar el inconformismo de otros sectores agrícolas y terminar en pronósticos imprevisibles.

⁵⁶ *El Tiempo*, 20 de julio de 1995.

identificaron autoridades eclesiásticas, civiles, municipales y de la guerrilla. Se trató del primer gran movimiento social que buscó cambiar la posición del Gobierno ante las consecuencias del proceso de globalización económica cafetera.

La protesta transcurrió en calma y sus proporciones fueron inferiores a lo esperado, aunque al paro se unieron el comercio, las escuelas y el transporte⁵⁷. Pero si bien el paro representó una protesta social masiva, la posición gubernamental no cambió.

Finalizado el Paro Nacional, los dirigentes de ASOPEMA, en cabeza de Gabriel Buitrago, deciden continuar con una huelga indefinida⁵⁸. Era la tercera vez en menos de un año que los libanenses participaban en un paro cafetero. Unos 2.000 caficultores deciden tomarse el parque Murillo Toro de Ibagué, reivindicando la condonación de deudas cafeteras en 50% para todos los afectados, y mayores auxilios al control de la broca⁵⁹. Al movimiento se unieron también campesinos del departamento del Quindío, Antioquia y Caldas, todos identificados con la condonación de las deudas, a los que también se sumaron temporalmente 3.000 cultivadores de arroz, algodón, sorgo y otros productos⁶⁰.

⁵⁷ El tránsito de vehículos también se vio interrumpido en las carreteras que atraviesan las zonas cafeteras. Para las autoridades cafeteras y el Gobierno, el resultado del movimiento fue intrascendente; para la Unidad Cafetera, representó un triunfo, pues por primera vez se realizó un paro de productores que involucró a cerca de cien municipios del país.

⁵⁸ Algunas versiones aseguraban que los campesinos del norte del Tolima llevaban 20 días preparando la protesta general. Fuentes periodísticas afirmaban que en las reuniones de preparación era evidente la presencia de dos o tres miembros del ELN. Los caficultores, que en su mayoría habían abandonado sus fincas, hablaban de taponamiento de vías y de bloquear el paso al occidente del país. *El Tiempo*, 19 de julio de 1995.

⁵⁹ *El Tiempo*, 20 de julio de 1995.

⁶⁰ *El Tiempo*, 20 de julio de 1995.

La opinión pública y dirigentes de diversos sectores también se manifestaron en torno a esta protesta campesina; se unieron voces críticas de intelectuales como Alfredo Molano, quien cuestionó fuertemente el papel de la Federación acusándola como culpable del deterioro social de los pequeños campesinos, debido a su burocratización, defensa elitista de intereses comercializadores y política de tecnificación. Las reacciones en defensa de la Federación también se hicieron sentir. Funcionarios del gremio intentaban demostrar la importancia histórica de la gestión institucional haciendo balances de los beneficios traídos al sector rural y, en general, al país⁶¹.

Monseñor José Luis Serna, obispo de la arquidiócesis Líbano-Honda, señalaba a la opinión pública el drama y la impotencia de los campesinos, tomando como referencia lo sucedido en el corregimiento de Tierradentro (Líbano), abandonado en su totalidad. El dirigente de ASOPEMA, Gabriel Buitrago, también revelaba el caso de las 2.000 fincas que habían sido abandonadas en el norte del departamento; el problema de la inseguridad, registrada en las estadísticas de la Policía, y los suicidios de caficultores producto del acoso económico; el debate de los campesinos, en su condición de convivir con la angustiada situación o hacerles juego a los ofrecimientos de la guerrilla, donde se ofrecían hasta dos salarios mínimos mensuales. En el Eje Cafetero, los dirigentes de Unidad Cafetera descartaban la posibilidad de realizar otra protesta masiva y se mostraban indiferentes a las estrategias y los criterios de ASOPEMA; según ellos, ahora existían otros mecanismos, como la discusión abierta y democrática.

En el transcurso de la protesta se dieron provocaciones, pero la actitud de los manifestantes, así como la de las autoridades civiles de Ibagué, estuvo evitando permanentemente un enfren-

⁶¹ *El Espectador*, 21 de agosto de 1995.

tamiento entre los campesinos y la fuerza pública⁶². Fuentes periodísticas afirmaron que mientras los campesinos se concentraban en Ibagué, los “bolchevos” azuzaban a los propietarios de fincas y de vehículos transportadores que no habían participado⁶³. Entre tanto, para muchos campesinos el espacio ganado por los “muchachos” y su intervención en el paro era de vital importancia. De hecho, la última esperanza para no ver embargar sus fincas era el apoyo y la asistencia a las reuniones convocadas por los Bolcheviques⁶⁴.

Después de 63 días, los campesinos decidieron volver a sus parcelas. El ministro de Agricultura, Castro Guerrero, les ofreció como punto principal la condonación de 70% de las deudas hasta de cinco millones de pesos a los pequeños agricultores⁶⁵. Además de lo anterior, los campesinos asumieron como propia la formación de la Comisión Accidental del Senado, cuyos integrantes se encargaron de analizar la política cafetera y de recomendar modificaciones en materia de deudas, precios y control

⁶² En el paro se produjo un intento de suicidio que pudo ser controlado.

⁶³ A cambio de su permanencia en la subregión, impusieron multas de hasta un millón de pesos. Lo mismo ocurrió con los dueños de los carros, a quienes también se les impusieron multas.

⁶⁴ Desde que comenzaron los rumores de paro cafetero, la guerrilla se acercó a los campesinos de las veredas para escucharlos y orientarlos sobre la manera más efectiva para que el Gobierno comprendiera su situación. Un labriego manifestó por aquellos días lo siguiente: “Hasta el momento, por lo menos en Líbano, ellos nunca han amenazado a nadie. Lo de la plata es por asustarnos. Pero ellos son muy amables y ya se han ganado el cariño de la gente. Cómo no le vamos a dar un plato de sancocho a quienes nos están apoyando, porque eso sí, el paro es cafetero, sino que a ellos les ha tocado colaborar, porque si no es así la gente prefiere morirse de hambre en su parcela”. *El Tiempo*, 9 de agosto de 1995.

⁶⁵ Las negociaciones siguieron el mismo esquema de las desarrolladas previamente en Líbano. Representantes de ASOPEMA, directivos de la Caja Agraria, Bancafé y el Incora, y el ministro de Agricultura, Castro Guerrero, discutieron los mecanismos del diálogo y de acuerdo. *El Tiempo*, 20 de septiembre de 1995.

de la broca. La huelga, según sus organizadores, despertó el liderazgo sindical y obligó a la Federación a trazar una nueva política para el control de la broca, para lo cual destinó 200.000 millones de pesos. “Permitió que los diversos sectores de la sociedad se pronunciaran al respecto, y se convirtió en un hecho histórico para el departamento”, dijo Gabriel Buitrago⁶⁶.

El ejemplo de este movimiento influye posteriormente para que la Asociación Agropecuaria del Huila logre movilizar cerca de 50.000 personas en las vías de este departamento, logrando que el Gobierno redacte la Ley 203 de 1996 en el Congreso, que abarcaría deudas que no eran sólo de los cafeteros⁶⁷.

Si bien este movimiento logró que el Gobierno se pronunciara en favor de una condonación de la deuda, los problemas de fondo, como la definición de una política de precios del grano nacional y la política cambiaria, no fueron discutidos. En realidad, el aumento de los costos internos no compensaba con el incremento del tipo de cambio. La broca había diezmando la cosecha en seis millones de sacos, después de haberse superado la cifra de quince millones bajo la consigna: “Cafeteros, a sembrar como locos”⁶⁸.

⁶⁶ Durante la movilización de protesta se presentaron detenciones, hostigamientos alevosos, negociaciones infructuosas, enfermedades broncorrespiratorias, dos intentos de suicidio, cinco nacimientos, un campesino cayó muerto mientras participaba en una marcha de protesta en Bogotá, también murió en confusos hechos un líder campesino de la vereda La Uribe del municipio de Villahermosa, y otro fue detenido en Ibagué. La protesta albergó oficialmente a más de 1.000 campesinos, entre los cuales había unas 30 mujeres. Los campesinos agradecieron el apoyo moral de la ciudadanía, más que el apoyo económico. *El Tiempo*, 16 de septiembre de 1995.

⁶⁷ El paro también fue punta de lanza en el país del movimiento que buscaba el mejoramiento en los salarios en el sector de la salud.

⁶⁸ *El Tiempo*, 5 de diciembre de 1995.

LA DINÁMICA POSTERIOR

Después de la condonación, el sector gremial oficial cafetero entró en conflicto directo con el gobierno de Samper. La falta de claridad entre el Banco de la República, el Congreso y el Gobierno lo llevó a asumir actitudes radicales como la de amenazar con declarar al Congreso en sesión permanente⁶⁹. La situación llegó a un punto de equilibrio cuando en 1997 el Gobierno y la FNCC llegaron a ciertos acuerdos que, a juicio de varios académicos y el gremio exportador, no atacaban de fondo el antiguo esquema de manejar la política de comercialización del grano dentro de un marco tradicional de sector primario, y sin que hubieran tenido en cuenta el modelo neoliberal⁷⁰.

⁶⁹ Pese al reajuste de 16,6% del grano, en agosto de 1996 se produce una nueva marcha cafetera en Armenia, con el apoyo de delegados del Valle del Cauca. El incremento parece ridículo a los productores, por lo que la protesta es orientada a revisar el precio interno del grano y a recordar al Gobierno los compromisos adquiridos con el sector. A pesar de la aprobación de la condonación de la deuda con la Ley 223 y 206, el Gobierno no manifestaba voluntad para hacer cumplir estas leyes. Al igual que las veces anteriores, los obispos son apoyo principal en este proceso. *El Tiempo*, 22 de agosto de 1996.

⁷⁰ El Estado es orientado a seguir haciendo las veces de organismo administrador, y la Federación, de agente comercial. La Federación seguiría siendo un mecanismo tradicional de concertación. A la manera como había llevado, por ejemplo, la experimentación tecnológica del caturra en las zonas rojas epicentros de descomposición social durante La Violencia. Estos acuerdos perfeccionaron la funcionalidad operacional de los gremios orientados tan sólo al campo de la comercialización del grano y la administración de la institución; sin embargo, no reflejaron ningún tipo de política social que beneficiara a los caficultores afectados por la apertura económica y la crisis de la caficultura tecnificada. La Unidad Cafetera seguía insistiendo en que era necesario aclarar el futuro de las deudas que fueron refinanciadas, especialmente para el caso de las propiedades hipotecadas. El efecto es evidente: los cafeteros y otras fuerzas sociales (transportadores y agricultores en general) llevan a cabo un paro de transporte en la llamada Zona Cafetera, que afectó la industria macro del café en 1997. *El Tiempo*, 12 de noviembre de 1997.

Después de ocho años de la “internacionalización del café”, el panorama social se ha transformado sustancialmente. El índice poblacional disminuyó en las zonas más afectadas. Por ejemplo, en 1993 se llegaron a contabilizar, en el Valle del Cauca, 25.000 familias que vivían de ese cultivo, y después, 7.000 habían cambiado de negocio. Los diagnósticos coinciden en señalar que las condiciones sociales del campo en Colombia han empeorado en los últimos años: el analfabetismo es cuatro veces mayor en el área rural que en la urbana, la indigencia llega a 37%, frente a sólo 13% en las ciudades, y 80% de la población no tiene algún tipo de seguridad social⁷¹. En forma paralela, aunque no hay datos disponibles, los agricultores han advertido un aumento en la inseguridad rural expresada en el abigeato, el boleteo y el secuestro, lo cual obliga o a abandonar las tierras o a generar un incremento de costos por tener que administrar los negocios desde la ciudad.

REFLEXIONES FINALES

El sector cafetero, tradicionalmente ligado al concepto de posesión de la tierra, dependiente de la producción agroindustrial y del mercado internacional, fue el primero en recibir el impacto de la globalización económica. El carácter mixto de la FNCC y las políticas macroeconómicas de los gobiernos de corte neoliberal generaron contradicciones al no definir con claridad políticas sociales que favorecieran a los grupos sociales más débiles. El resultado es la formación de un fuerte movimiento social que presionó a los gobernantes en la búsqueda de soluciones para su difícil condición socioeconómica.

Las coaliciones entre los cafeteros se movieron en distintas direcciones. El caos producido por la polarización y fragmenta-

⁷¹ *El Tiempo*, 29 de julio de 1996.

ción de los gremios y grupos de poder durante la administración Samper favoreció la intervención de otros actores como el clero católico, el Congreso, guerrillas del ELN y las FARC, los Comités Cafeteros Departamentales y organizaciones como Asopepema y Unidad Cafetera. Estos grupos, si bien lucharon por definir políticas para solucionar los problemas propios de la industria y la deuda de los cafeteros, reivindicaron en la práctica el derecho a la propiedad y la defendieron ante la barbarie del capitalismo financiero.

En el nivel local, es importante analizar el papel de la Iglesia católica, ASOPEMA y los Bolcheviques. La carencia de organizaciones de tipo nacional que representaran a los campesinos pobres, y la debilidad extrema de los actores políticos, expresada en limitaciones para plantear políticas de estabilización macroeconómica, dinamizaron el accionar del clero y de una organización campesina local, que se vio fortalecido en espacios dejados por el Estado y los partidos tradicionales. La lucha por la propiedad de la tierra permitió retomar el capital político y social de una Iglesia que había visto perder espacios en el campo por las heridas sociales que abrió La Violencia en la zona; el proceso de fragmentación de los núcleos hacendatarios, en donde existieron mecanismos de socialización, que permitían presentar a la propiedad y la familia como pilares de justicia social y progreso en el campo; y el proceso de tecnificación de la caficultura tradicional, que individualizó y monetizó la fuerza de trabajo familiar. De igual manera, ASOPEMA, considerada como organización campesina local, reactivó una nueva fase de un movimiento campesino, en la que ya no son protagonistas arrendatarios, agregados y colonos, sino pequeños propietarios, con reivindicaciones concretas de problemas locales, y que buscan a su vez no verse infectados por las prácticas políticas de los partidos tradicionales. Entre tanto, en el campo, los Bolcheviques parecen cumplir un función de control social, especialmente

cuando en el período de mayor degradación social impusieron normas de comportamiento social, como el control de la violencia intrafamiliar, la delincuencia y la vagancia, medidas con las que pareció frenarse la degradación de los afectados núcleos familiares campesinos. La presión de esta guerrilla también dinamizó la movilización de los campesinos y frenó los presuntos embargos, remates o secuestros que deberían darse con la deuda de los cafeteros por parte de las entidades crediticias. Como efecto, el mercado de tierras local sufrió una paralización total, factor al que se sumó la decadente producción cafetera. La oferta creció y la demanda por tierras descendió, llevando a un abaratamiento sin precedentes de los predios, y a un fin temporal de la especulación rentista de la tierra causada por el café.

También es importante señalar que este movimiento cafetero no es un movimiento de trabajadores, es un movimiento de pequeños y medianos propietarios acosados por las deudas con entidades bancarias. Los trabajadores temporales, nómadas por tradición, no son actores vitales del proceso. Éstos se favorecen por la coyuntura expansiva de las zonas cocaleras en la Amazonia y los Llanos Orientales.

El movimiento cafetero, si bien en términos generales se desarrolló en forma pacífica, recibió en algunos casos la estigmatización política, por lo que algunos dirigentes fueron víctimas de amenazas y otros asesinados. Igualmente, la presión de grupo fue aprovechada por políticos opuestos a la coalición interna burocrática de la Federación, para dictar una ley reglamento de participación democrática directa de los productores en las elecciones cafeteras con sufragio universal, para elegir los comités municipales y departamentales de cafeteros y el Congreso Nacional de Cafeteros⁷².

⁷² Rodríguez, 1998, p. 20.

Las prácticas de presión social se convirtieron especialmente en paros y marchas masivas. El bloqueo a las vías de transporte, al estilo de los agricultores europeos afectados por las reformas neoliberales, es aplicado en toda su dimensión interregional y local. El comercio, el transporte y la educación también se unen a la protesta, al igual que trabajadores de otros sectores agrícolas. La presión desciende gracias a las políticas de condonación y refinanciación apoyadas por dirigentes bipartidistas –ligados al sector cafetero–, líderes de la jerarquía eclesiástica y dirigentes nacionales del gremio cafetero, y por los actores locales arriba mencionados.

El movimiento cafetero no fue un movimiento en la búsqueda de nuevos paradigmas; éste parte de una realidad concreta que responde a un modelo de reestructuración estatal y desarrollo económico, en el que el Estado no estaba preparado para proveer un marco regulador para el sector privado, garantizar una provisión de servicios básicos –salud, educación y seguridad social–, realizar nuevas inversiones en infraestructura básica y propender a una distribución del ingreso más equitativa. En este sentido, el proyecto de transformación socioproductiva individual del modelo neoliberal puede convertirse en una utopía si no se ofrecen programas de capacitación en el sector rural acoplados a los cambios tecnológicos modernizantes, que generen nuevas formas de producción y que transformen las relaciones consuetudinarias de los productores. De esto se desprende por qué la década de los noventa fue la década de la descomposición del agro y el caos⁷³. En este sentido, la acción del movimiento cafetero respondió a cuestiones materiales y sociales concretas, en las que el campesino deposita su esperanza en la credibili-

⁷³ Un material interesante sobre el proceso de apertura económica y modernización del sistema productivo puede leerse en Machado, 1992.

dad ganada por un grupo heterogéneo de dirigentes identificados con una causa común: la condonación de sus deudas y el no embargo de sus fincas.

FUENTES

Periódicos

El Espectador, 1990-1995.

El Tiempo, 1989-2000.

Tolima 7 Días, 1995.

ENTREVISTAS

Bedoya, Germán: Secretario general de Asopema.

Buitrago, Parmenio: Pequeño propietario, La Aurora-Líbano.

Dávila, Óscar: Inspector de Trabajo, Alcaldía del Líbano.

Orellano Centeno, Gustavo Antonio: Presidente de la ANUC, seccional Líbano.

Serna, José Luis, Obispo arquidiócesis Líbano-Honda.

Vallejo, Hermes y otros dirigentes de Asopema, Asamblea General en Líbano.

FUENTES PRIMARIAS

Documento: Gobernación de Cundinamarca y Comité de Cafeteros de Cundinamarca, *Reglamento para las haciendas cafeteras. Elaborado por la comisión creada por la gobernación de Cundinamarca*, Bogotá: Editorial El Gráfico, 1934.

Documento de Trabajo "Jornada Cafetera Libanense". Organizador: Unidad Cafetera El Líbano. Coordinación general: monseñor José Luis Serna Alzate. Julio 13 y 14 de 1996, Líbano, Tolima.

Constitución Nacional de Colombia, Artículos 64-66.

FUENTES SECUNDARIAS

Dombois, Raines. "Tendencias en las transformaciones de las relaciones laborales en América Latina. Los casos de Brasil, Colombia y México", en Luz Gabriela Arango y Carmen Marina López (compiladoras), *Globalización, apertura económica y relaciones industriales en América Latina*. Bogotá: CES, Facultad de Ciencias Humanas-Universidad Nacional, 1999, pp. 308-336.

Leal Buitrago, Francisco *et al.* *El agro en el desarrollo histórico colombiano. Ensayos de economía política*. Bogotá: Punta de Lanza, 1977.

Machado, Absalón (compilador), *Desarrollo rural y apertura económica*, Bogotá: Fondo DRI, IICA.

Ocampo, José Antonio, "Políticas de regulación de la oferta de café", en José Antonio Ocampo (ed.), *Lecturas de economía cafetera*. Bogotá: Federarrollo-Tercer Mundo, 1987, pp. 13-37.

Ramírez Bacca, Renzo, "La situación de los cafeteros y el fin de una era", *Macondo*, N^o 58, 1997.

———. "Café: su leyenda e imagen", *Macondo*, N^o 38, 1995.

Rodríguez Vargas, Francisco, "La organización social de los productores de café", *Innovar. Revista de Ciencias Administrativas y Sociales*, N^o 12, julio-diciembre de 1998, pp. 13-32.